

Edición
en lengua española

Comunicaciones e informaciones

<u>Número de información</u>	Sumario	Página
	<i>I Comunicaciones</i>	
	Comisión	
2003/C 82/01	Tipo de cambio del euro	1
2003/C 82/02	Ayudas estatales — Francia — Ayuda C 6/2003 (ex NN 139/02) — Plan Rivesaltes tasas parafiscales CIVDN — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE	2
2003/C 82/03	Ayudas estatales — Alemania — Ayuda C 9/03 (ex NN 156/01) y (ex N 97/01) — Promoción de las agrupaciones bávaras de explotación conjunta de maquinaria agrícola — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE	12
2003/C 82/04	Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones	18
2003/C 82/05	Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones ⁽¹⁾	18
2003/C 82/06	Notificación previa de una operación de concentración (asunto COMP/M.3104 — Compass/Cremonini/JV) — Asunto susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado ⁽¹⁾	20
	<i>II Actos jurídicos preparatorios en aplicación del título VI del Tratado de la Unión Europea</i>	
2003/C 82/07	Iniciativa de la República Helénica con vistas a la adopción de un Reglamento del Consejo relativo a los procedimientos para modificar el Manual Sirene	21
2003/C 82/08	Iniciativa del Reino de España con vistas a la adopción de una Directiva del Consejo sobre la obligación de los transportistas de comunicar los datos de las personas transportadas	23

<u>Número de información</u>	Sumario (<i>continuación</i>)	Página
2003/C 82/09	Iniciativa de la República Helénica con vistas a la adopción de una Decisión del Consejo sobre los procedimientos para modificar el Manual Sirene	25
<hr/>		
	III <i>Informaciones</i>	
	Comisión	
2003/C 82/10	Convocatoria de propuestas restringida en el ámbito de la inspección de la salud y la seguridad en el trabajo — VP/2003/19	27

I

(Comunicaciones)

COMISIÓN

Tipo de cambio del euro ⁽¹⁾

4 de abril de 2003

(2003/C 82/01)

1 euro =

Moneda	Tipo de cambio	Moneda	Tipo de cambio		
USD	dólar estadounidense	1,072	LVL	lats letón	0,6239
JPY	yen japonés	128,7	MTL	lira maltesa	0,4232
DKK	corona danesa	7,4265	PLN	zloty polaco	4,3615
GBP	libra esterlina	0,6844	ROL	leu rumano	36 430
SEK	corona sueca	9,1982	SIT	tólar esloveno	232,0255
CHF	franco suizo	1,4865	SKK	corona eslovaca	41,234
ISK	corona islandesa	83,82	TRL	lira turca	1 777 000
NOK	corona noruega	7,798	AUD	dólar australiano	1,7842
BGN	lev búlgaro	1,9497	CAD	dólar canadiense	1,5824
CYP	libra chipriota	0,58531	HKD	dólar de Hong Kong	8,3611
CZK	corona checa	31,781	NZD	dólar neozelandés	1,9705
EEK	corona estonia	15,6466	SGD	dólar de Singapur	1,9044
HUF	forint húngaro	245,43	KRW	won de Corea del Sur	1 348,58
LTL	litas lituana	3,4523	ZAR	rand sudafricano	8,5424

⁽¹⁾ Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

AYUDAS ESTATALES — FRANCIA

Ayuda C 6/2003 (ex NN 139/02) — Plan Rivesaltes tasas parafiscales CIVDN

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2003/C 82/02)

Por carta de 24 de enero de 2003, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Francia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda arriba citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de la presente publicación, enviándolas a:

Comisión Europea
Dirección General de Agricultura
Dirección de Legislaciones Económicas Agrarias
L 130 5/120
B-1049 Bruselas
Fax (32-2) 296 21 51

Dichas observaciones serán comunicadas a Francia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

A raíz de una denuncia, la Comisión Europea interrogó a las autoridades francesas en relación con las medidas mediante cartas de 19 de julio de 1999, 16 de diciembre de 1999, 24 de agosto de 2000 y 9 de diciembre de 2000. La Representación Permanente de Francia ante la Unión Europea contestó a la Comisión mediante cartas de 19 de agosto de 1999, 24 de febrero de 2000 y 25 de enero de 2001. Los servicios de la Comisión se reunieron con las autoridades francesas y con una delegación del Comité interprofessionnel des vins doux naturels (CIVDN). El régimen no ha sido notificado a la Comisión con arreglo al apartado 3 del artículo 88 del Tratado. Parece, por tanto, que se trata de una nueva ayuda que infringe lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado y que, por consiguiente, es ilegal.

La Comisión ha decidido incoar el procedimiento de examen previsto en el apartado 1 del artículo 88 del Tratado en relación con estas ayudas porque parecen otorgar a los productores vitivinícolas ayudas estatales que podrían ser incompatibles con el artículo 87 del Tratado.

El «Plan Rivesaltes»

En 1996, el Comité interprofessionnel des vins doux naturels (CIVDN) decidió llevar a cabo una acción de reconversión vitícola para sustituir, mediante el arranque y la replantación de variedades vitícolas de calidad, una parte de la producción de vinos dulces naturales de la región de Pirineos Orientales con el fin de poner remedio a la crisis estructural que atravesaba esta

producción y que se manifestaba por el hundimiento regular de sus mercados. La ayuda tenía por objeto financiar la mejora cualitativa del encepamiento en esta región.

Para llevar a cabo esta reconversión (conocida como «Plan Rivesaltes») los productores de la región tuvieron acceso a una «prima de retirada» por hectárea financiada por una cotización interprofesional, y a una ayuda por hectárea financiada con cargo a los presupuestos públicos para cubrir parcialmente los costes de reconversión propiamente dichos.

Con su decisión 96-1, de 5 de julio de 1996, el CIVDN instauró una cotización interprofesional para la financiación del plan de reconversión «Rivesaltes» y «Grand Roussillon». La cotización, que ascendía a 50 francos franceses/hectólitro, estaba destinada a financiar el pago de una prima de retirada para toda parcela que, habiendo producido vino de denominación «Rivesaltes» o «Grand Roussillon» en 1995, produjera vino de mesa o vinos de la tierra a partir de la cosecha de 1996 hasta la cosecha de 2000 inclusive. La prima se concedió efectivamente a los productores que se comprometieron a no reivindicar la denominación de origen controlada (DOC) «Rivesaltes» o «Grand Roussillon» durante un período de cinco años. De este modo, la prima tenía por objeto compensar a los productores participantes en el Plan Rivesaltes por las pérdidas de ingresos derivadas de la no utilización de la DOC. La prima no entrañaba la suspensión o reducción de la producción sino sólo una compensación por utilizar la producción fuera de la DOC. El importe de la prima de retirada era de 5 000 francos franceses anuales por hectárea «retirada».

En lo que respecta a los costes de reconversión, según las autoridades francesas el plan de reconversión de los viñedos con la DOC Rivesaltes adoptado en 1996 se refería a 3 250 hectáreas: 1 250 hectáreas para una producción de «Muscat de Rivesaltes»; 1 000 hectáreas para una producción de «Côtes du Roussillon» y «Côtes du Roussillon Villages» y 1 000 hectáreas para una producción de vinos de la tierra varietales. Para respaldar este plan, las autoridades francesas habían aceptado prestar apoyo financiero por importe de 111 millones de francos franceses. Este apoyo preveía una ayuda de 24 000 francos franceses/hectárea para la reconversión en DOC «Muscat de Rivesaltes» y una ayuda de 40 000 francos franceses/hectárea para la reconversión en DOC «Côtes du Roussillon Villages» y en vinos de la tierra. Las autoridades francesas han estimado en 110 000 francos franceses/hectárea los costes reales de reconversión en la región. El coste total de la reconversión realizada fue, según las autoridades francesas, de 258,5 millones de francos franceses (39,4 millones de euros). Por su parte, los poderes públicos habrían aportado 75,250 millones de francos franceses (11,01 millones de euros) de los 111 millones de francos (16,9 millones de euros) previstos inicialmente. También han confirmado que los planes de reconversión se hallan en gran parte ejecutados (2 350 hectáreas de las 3 250 hectáreas previstas) y que los poderes públicos no han extendido la cotización. Todas las ayudas cesaron, como máximo, el 1 de agosto de 2000.

Ayudas de promoción publicitaria y de funcionamiento de algunas DOC

A partir del 1 de enero de 1998 el CIVDN instituyó una cotización interprofesional no notificada para financiar acciones de promoción publicitaria y de funcionamiento en favor de las denominaciones de origen controladas siguientes: «Rivesaltes», «Grand Roussillon», «Muscat de Rivesaltes» y «Banyuls». Esta cotización se prorrogó en 2000 con ligeras variaciones. La Comisión no dispone de información sobre la duración de este último régimen o de una posible prolongación de éste.

Apreciación de la Comisión sobre estas medidas

La Comisión observa, primeramente en lo que respecta a la naturaleza de las cotizaciones de que se trata, que éstas fueron aprobadas directamente por el Gobierno francés siguiendo el procedimiento previsto en su Ley 200, de 2 de abril de 1943, por la que se instituía un Comité interprofesional de vinos dulces naturales y vinos de licor de denominación controlada. Así, la aprobación por parte del Gobierno constituye una condición previa a la adopción de tales cotizaciones. La Ley 200 prevé, concretamente, que las cotizaciones resulten obligatorias para todos los miembros de las profesiones interesadas así que haya dado su visto bueno el Gobierno o, en el caso presente, su Comisario. De ello se desprende que, para surtir efecto pleno, este tipo de cotizaciones requiere un acto de autoridad pública. Por esta razón, la Comisión considera en esta fase que en el caso presente se trata de tasas parafiscales, es decir, de recursos públicos.

De conformidad con el punto 23.3 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario⁽¹⁾ y la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales, todas

las ayudas ilegales han de ser evaluadas con arreglo a los textos legales vigentes en el momento de la concesión de las ayudas. Las Directrices agrarias se aplican desde el 1 de enero de 2000. Por lo tanto, las ayudas concedidas después de esta fecha deberán evaluarse a la luz de estas Directrices, mientras que las concedidas antes de esta fecha deberán, en su caso, examinarse a la luz de las reglas y prácticas aplicables antes del 1 de enero de 2000 y conforme a las disposiciones en vigor de la OCM vitivinícola.

En lo que respecta a las ayudas previstas dentro del Plan Rivesaltes, éstas se concedieron entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de julio de 2000, es decir, antes de la entrada en vigor, el 1 de agosto de 2000, del Reglamento (CE) n° 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola⁽²⁾. Puesto que se trata de medidas que entran en el ámbito de aplicación de la organización común del mercado vitivinícola, deben examinarse a la luz de la legislación vigente en aquel momento, es decir, del Reglamento (CEE) n° 822/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola⁽³⁾ y de sus Reglamentos de aplicación.

En lo que respecta a la «prima de retirada» prevista en el dispositivo de ayuda francés, tales primas no estaban previstas por la OCM ni tampoco, más concretamente, por el Reglamento (CEE) n° 456/80 del Consejo, de 18 de febrero de 1980, relativo a la concesión de primas por abandono temporal y por abandono definitivo de determinadas superficies plantadas de vid y de primas por renuncia a la replantación⁽⁴⁾. Este Reglamento preveía únicamente una prima por abandono temporal o definitivo de la producción, pagadero cuando un productor decidía contribuir a la disminución del potencial vitícola comunitario mediante el arranque de sus viñas. Puesto que la prima no ha financiado ninguna disminución del potencial ni ningún abandono, en esta fase no parece que la medida entre en el ámbito de aplicación de la antigua OCM vitivinícola.

Se afirma que la finalidad de la ayuda nacional era aliviar financieramente a los productores que, en su calidad de empresarios, hubieran decidido libremente dar un paso puramente comercial, cuyas cargas parecen constituir gastos relacionados con el ejercicio de la actividad económica. Según la práctica constante de la Comisión aplicable antes de la adopción de las Directrices agrícolas y según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia⁽⁵⁾, las ayudas de funcionamiento son las que tienen por objeto liberar a una empresa de los costes que normalmente hubiera debido soportar en el marco de su gestión corriente o de sus actividades normales. Esta idea está recogida en el punto 3.5 de las Directrices agrícolas, según el cual estas ayudas, por su propia naturaleza, suelen perturbar el mecanismo de las organizaciones comunes de los mercados.

⁽²⁾ DO L 179 de 14.7.1999.

⁽³⁾ DO n° L 84 de 27.3.1987. Derogado por el Reglamento (CE) n° 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola.

⁽⁴⁾ DO L 57 de 29.2.1980.

⁽⁵⁾ Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 8 de junio de 1995, en el asunto T-459/93, Siemens SA contra Comisión de las Comunidades Europeas, Recopilación 1995, p. II-01675.

⁽¹⁾ DO C 28 de 1.2.2000 y rectificación en el DO C 232 de 12.8.2000.

La Comisión constata en este punto que la ayuda se concedió por hectárea/año, y que por lo tanto estaba estrechamente vinculada a la cantidad de vino producida. La Comisión recuerda que en ningún caso puede aprobar una ayuda que sea incompatible con las disposiciones que rigen una organización común de mercados o contraria al buen funcionamiento de la organización de mercados considerada. En esta fase, considera que la «prima de retirada» parece constituir una ayuda de funcionamiento capaz de perturbar el mecanismo de la organización común del mercado vitivinícola y que, por esta razón, podría ser incompatible con las normas vigentes en materia de mercados y competencia.

En lo que respecta a los costes de la reconversión, el artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 822/87 disponía que toda ayuda nacional para la plantación de viñedos quedaba prohibida a partir del 1 de septiembre de 1988, salvo las que respondieran a los criterios particulares de alcanzar el objetivo de disminuir la cantidad de la producción o mejorarla cualitativamente sin entrañar un aumento de la producción. De ahí que sólo fueran admisibles las variedades de cepas que sirvieran para mejorar la calidad y no tuvieran una productividad elevada en las tierras consideradas.

El Reglamento (CEE) n° 2741/89 de la Comisión, de 11 de septiembre de 1989, por el que se fijan los criterios para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 822/87 del Consejo en lo relativo a la ayuda nacional a la plantación de superficies vitícolas⁽⁶⁾, establece con qué criterios deben examinarse los proyectos de ayudas nacionales a la plantación de superficies vitícolas admisibles en virtud de los artículos 87, 88 y 89 del Tratado. El artículo 2 del Reglamento dispone que los proyectos de ayudas nacionales deben demostrar de forma satisfactoria el cumplimiento del objetivo de disminución del volumen de producción o de mejora de la calidad sin un aumento subsiguiente de la producción.

El artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 2741/89 disponía, por su parte, que el importe de la ayuda asignada por hectárea de viña plantada no debía sobrepasar el 30 % de los gastos reales de arranque y plantación. Según las autoridades francesas, dado que el coste total de la reconversión realizada habría sido de 258,5 millones de francos franceses y que los poderes públicos habrían contribuido con un importe de 75,25 millones de francos franceses, concluyen que, sumando todas las financiaciones, los poderes públicos habrían contribuido en total un 29,11 % de los costes de la reconversión efectivamente realizada. Ahora bien, según el artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 2741/89, el elemento pertinente para calcular los costes de reconversión era el de la ayuda efectivamente otorgada por hectárea de viña plantada. En la fase presente, esta lógica parece excluir los cálculos globales del ejercicio de reconversión considerados en su totalidad y, por lo tanto, los cálculos basados en la media por hectárea de los costes totales. Además, las autoridades francesas calculan esta media en relación con acciones de reconversión diferenciadas.

⁽⁶⁾ DO L 264 de 12.9.1989.

La Comisión considera en este momento que, habida cuenta de los costes por hectárea declarados por las autoridades francesas (110 000 francos franceses/hectárea), las ayudas concedidas en el caso presente habrían tenido que limitarse, respectivamente, a 33 000 francos franceses/hectárea y al 30 % de los gastos reales de cada productor tomado individualmente. De ello se desprende que todo rebasamiento de este límite, es decir, todo rebasamiento del 30 % de los costes efectivos a escala individual, podría constituir una ayuda incompatible con la normativa aplicable.

En virtud de las facultades que le confiere el artículo 10 del Reglamento (CE) n° 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 [convertido en artículo 88] del Tratado CE⁽⁷⁾, la Comisión ha emplazado a las autoridades francesas a enviarle toda la información necesaria sobre las dos reconversiones efectuadas, en particular lo siguiente: número de viticultores beneficiarios de ayudas nacionales a la plantación de superficies vitícolas; la superficie afectada, desglosada por categoría de suelo; la parte de esta superficie cuya plantación fue precedida de arranque; la parte de esta superficie reconocida como apta para la producción de vcpvd; el destino de las superficies plantadas (uva de vinificación, de mesa, de pasificación, vivero o vid madre de portainjertos, etc.); variedades utilizadas; prueba de la autorización previa de las autoridades francesas para la utilización de dichas variedades; evolución del potencial de producción; cualquier información pertinente en relación con la intensidad de la ayuda.

Por lo que respecta a las ayudas para la promoción publicitaria instauradas por algunas DOC, la compatibilidad de aquellas que se concedieron antes del 1 de enero de 2002 deberá examinarse a la luz del encuadramiento de las ayudas nacionales para publicidad de productos agrarios y de determinados productos no incluidos en el anexo II del Tratado CEE⁽⁸⁾ y, para las ayudas otorgadas después de esa fecha, a la luz de las Directrices sobre ayudas estatales para publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado CE y de determinados productos no incluidos en el mismo⁽⁹⁾.

Las autoridades francesas señalan que han notificado regularmente la normativa sobre la tasa parafiscal destinada a la financiación del CIVDN, que la Comisión ha examinado y aprobado. En efecto, la Comisión ha aprobado en último lugar, en el contexto de la ayuda estatal N 184/97 y por un período que se extendía hasta finales de 2002, una ayuda estatal financiada por una tasa parafiscal para sufragar, entre otras cosas, acciones de promoción publicitaria y de funcionamiento en favor del CIVDN. Ahora bien, según la información recibida, las cotizaciones consideradas en el caso presente son cobradas por el CIVDN por añadidura a la tasa parafiscal destinada a las acciones de comunicación y promoción ya autorizadas por la Comisión. Por este motivo, la Comisión considera en la fase presente que la autorización dada con anterioridad no constituye una tácita autorización de cualquier modificación o de cualquier otra medida que vaya a añadirse a la ayuda autorizada anteriormente.

⁽⁷⁾ DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

⁽⁸⁾ DO C 302 de 12.11.1987.

⁽⁹⁾ DO C 252 de 12.9.2001.

La Comisión ha emplazado a las autoridades francesas a enviarle la información necesaria en relación con estos dispositivos de ayuda, incluidos los dispositivos no mencionados y no notificados que pudieran estar actualmente en vigor, para permitirle apreciar su compatibilidad con, en particular, los criterios negativos y positivos aplicables en materia de publicidad y promoción y la intensidad máxima de ayuda que puede autorizarse. Esta información también permitirá medir las repercusiones de una posible acumulación de ayudas entre el régimen autorizado con anterioridad y los regímenes no notificados considerados en el caso presente.

La Comisión también ha constatado que estas tasas parafiscales son, en sus mecanismos, muy similares a las ya autorizadas por la Comisión. De los textos que las instauran se desprende, además, que únicamente afectan a la producción vitícola de una región determinada. Así pues, en esta fase es posible concluir que ningún producto importado está o ha estado sometido a las tasas parafiscales consideradas en el caso presente.

CARTA

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France que, après avoir examiné les informations fournies par ses autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

I Procédure

- (1) À la suite d'une plainte, la Commission européenne a interrogé les autorités françaises à propos des mesures en objet, par lettres des 19 juillet et 16 décembre 1999 et des 24 août et 9 décembre 2000. La représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a répondu à la Commission par lettres des 19 août 1999, 24 février 2000 et 25 janvier 2001.
- (2) Les services de la Commission ont rencontré les autorités françaises le 26 janvier 2000 et une délégation du Comité interprofessionnel des vins doux naturels (CIVDN) le 31 mars 2000.
- (3) Comme elle a été mise à exécution sans autorisation préalable de la Commission, la mesure a été inscrite dans le registre des aides non notifiées.

II Description

(4) La présente lettre concerne deux types d'actions:

- 1) le Plan Rivesaltes, et
- 2) le financement d'activités de «publi-promotion» et de fonctionnement de certaines appellations d'origine contrôlées (AOC).

1. Le Plan Rivesaltes

- (5) En 1996, le CIVDN a décidé de mettre en place une action de reconversion viticole visant à remplacer, au moyen de l'arrachage et la replantation de variétés viticoles de qualité, une partie de la production des vins doux

naturels de la région des Pyrénées-Orientales, afin de remédier à la crise structurelle que connaissait cette production et qui se manifestait par un effondrement régulier des débouchés. L'aide avait pour but de financer l'amélioration qualitative de l'encépagement dans cette région. Elle a cessé, au plus tard, le 1^{er} août 2000.

Afin de mener à bien ce plan de reconversion (aussi connu sous le nom de «Plan Rivesaltes») les producteurs de la région ont eu accès à deux types d'aides:

- 1) une prime de gel par hectare financée par une cotisation interprofessionnelle, et
- 2) une aide à l'hectare financée par le budget de l'État et celui des collectivités locales pour couvrir partiellement les coûts de reconversion proprement dits.

1.1. Prime de gel

- (6) Par décision 96-1 du 5 juillet 1996, le CIVDN à AOC a instauré une cotisation interprofessionnelle pour le financement du plan de reconversion «Rivesaltes» et «Grand Roussillon».
- (7) La cotisation, qui se montait à 50 FRF⁽¹⁰⁾/hectolitre, était destinée à financer le versement d'une prime («prime de gel») pour toute parcelle qui, ayant produit du Rivesaltes ou du Grand Roussillon en 1995, produirait, dès la récolte 1996 et jusqu'à la récolte 2000 incluse, du vin de table ou des vins de pays. Le produit de la perception de la cotisation a été cantonné dans un fonds spécial.
- (8) La prime de gel a été effectivement accordée aux producteurs s'engageant à ne pas revendiquer l'appellation d'origine contrôlée Rivesaltes ou Grand Roussillon pendant une durée de cinq ans. Cette prime visait ainsi à compenser les pertes des revenus, liées à l'impact sur le prix résultant du fait de ne plus utiliser les deux dénominations, des producteurs voulant participer au Plan Rivesaltes. La prime n'impliquait pas un arrêt de la production ou une réduction de celle-ci, mais uniquement une compensation pour l'utilisation de la production en dehors de l'AOC. L'objectif était donc de réduire rapidement le potentiel de mise en vente de vins sous l'AOC.
- (9) Le montant de la prime de gel était de 5 000 FRF par an par hectare «gelé». Toute parcelle attributaire d'une aide cessait de bénéficier de la prime l'année de sa reconversion.

1.2. Aide à la reconversion

- (10) D'après les autorités françaises, le plan de reconversion du vignoble AOC Rivesaltes, tel qu'adopté en 1996, portait sur 3 250 hectares: 1 250 hectares pour une production de Muscat de Rivesaltes, 1 000 hectares pour une production de Côtes du Roussillon et Côtes du Roussillon Villages (variétés Syrah, Mourvèdre, Roussanne, Marsanne et Vermentino) et 1 000 hectares pour une production de vins de pays de cépage (variétés Chardonnay, Cabernet, Merlot, etc.).

⁽¹⁰⁾ Un franc français (FRF) = 0,15 euros.

- (11) À l'appui de ce plan, les autorités françaises avaient accepté d'apporter un soutien financier à hauteur de 111 millions de FRF, ainsi répartis: 85 millions de FRF par l'intermédiaire de l'Onivins et 26 millions de FRF par les collectivités locales (Languedoc-Roussillon et conseil général des Pyrénées-Orientales).
- (12) Ce soutien prévoyait une aide de 25 000 FRF/ha pour la reconversion en AOC Muscat de Rivesaltes, et une aide de 40 000 FRF/ha pour la reconversion en AOC Côtes du Roussillon Villages et en vins de pays.
- (13) D'après les autorités françaises, les coûts réels de reconversion dans la région peuvent être estimés à 110 000 FRF/ha.
- (14) Les autorités françaises ont confirmé que les plans de reconversion ont été réalisés pour une grande partie (2 350 ha sur les 3 250 ha prévus).
- (15) Le coût total de la reconversion réalisée a été, d'après les autorités françaises, de 258,5 millions de FRF (39,4 millions d'euros). Pour leur part, les pouvoirs publics auraient contribué à hauteur de 75,250 millions de FRF (11,01 millions d'euros) sur les 111 millions de FRF (16,9 millions d'euros) prévus au départ.

2. *Cotisations interprofessionnelles pour la «publi-promotion» et le fonctionnement de certaines AOC*

- (16) Par décision 97-3 du 29 décembre 1997, le CIVDN a institué, à compter du 1^{er} janvier 1998, une cotisation interprofessionnelle visant à financer des actions de «publi-promotion» et de fonctionnement en faveur des AOC suivantes: Rivesaltes, Grand Roussillon, Muscat de Rivesaltes et Banyuls.
- (17) Le montant hors taxe par hectolitre a été fixé comme suit: Banyuls et Banyuls Grand Cru, 25 FRF/hl; Grand Roussillon, 30 FRF/hl; Muscat de Rivesaltes, 50 FRF/hl; Rivesaltes, 30 FRF/hl.
- (18) Ces cotisations ont été affectées de la manière suivante: Rivesaltes, 25 FRF/hl pour «publi-promotion» et 5 FRF/hl pour fonctionnement, Grand Roussillon, 45 FRF/hl pour «publi-promotion» et 5 FRF/hl pour fonctionnement, Banyuls, 20 FRF/hl «publi-promotion» et 5 FRF/hl pour fonctionnement.
- (19) Par décision 98-1 du 10 juillet 1998, le CIVDN a institué, à compter du 1^{er} septembre 1998, une cotisation interprofessionnelle visant à financer des actions de «publi-promotion» et de fonctionnement en faveur des AOC suivantes: Rivesaltes, Grand Roussillon et Maury.
- (20) Les montants de la cotisation hors taxe par hectolitre ont été fixés comme suit: Grand Roussillon, 25 FRF/hl; Maury, 5 FRF/hl; Rivesaltes, 35 FRF/hl.
- (21) Ces cotisations ont été affectées de la manière suivante: Rivesaltes, 30 FRF/hl pour «publi-promotion» et 5 FRF/hl

pour fonctionnement; Grand Roussillon, 20 FRF/hl pour «publi-promotion» et 5 FRF/hl pour fonctionnement; Maury, 5 FRF/hl pour fonctionnement.

- (22) Les deux cotisations précédentes ont été abrogées par une nouvelle décision 99-1, du 17 décembre 1999, par laquelle le CIVDN a institué une cotisation interprofessionnelle visant à financer des actions de «publi-promotion» et de fonctionnement en faveur des AOC suivantes: Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Rivesaltes, Rivesaltes, Grand Roussillon et Maury.
- (23) Les montants hors taxe par hectolitre ont été fixés comme suit: Grand Roussillon, 25 FRF/hl; Rivesaltes, 35 FRF/hl; Banyuls et Banyuls Grand Cru, 25 FRF/hl; Muscat de Rivesaltes, 55 FRF/hl; Maury, 0 FRF/hl.
- (24) Ces cotisations ont été affectées de la manière suivante: Rivesaltes, 30 FRF/hl pour «publi-promotion» et 5 FRF/hl pour fonctionnement; Grand Roussillon, 20 FRF/hl pour «publi-promotion» et 5 FRF/hl pour fonctionnement; Muscat de Rivesaltes, 50 FRF/hl pour «publi-promotion» et 5 FRF/hl pour fonctionnement; Banyuls et Banyuls Grand Cru, 20 FRF/hl «publi-promotion» et 5 FRF/hl pour fonctionnement.
- (25) Cette cotisation a été reconduite, avec de légères variations, par la décision 00-1. La Commission ne dispose pas d'informations concernant la durée de ce dernier régime ou l'éventuelle reconduction de celui-ci.

III **Appréciation**

1. *Caractère d'aide. Applicabilité de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE*

- (26) En ce qui concerne tout d'abord la nature des cotisations en l'espèce, la Commission note que celles-ci ont été approuvées directement par le gouvernement français, à travers son commissaire, suivant la procédure prévue à l'article 6 dans la loi 200 du 2 avril 1943 portant création d'un Comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées, modifiée par le décret n° 56 du 20 octobre 1956. L'approbation du gouvernement constitue ainsi une condition préalable à l'adoption de telles cotisations.
- (27) L'article 7 de la loi 200 prévoit notamment que les cotisations sont rendues obligatoires pour tous les membres des professions intéressées dès qu'elles ont reçu l'acquiescement du gouvernement ou, dans le cas d'espèce, de son commissaire.
- (28) Il ressort de cela que ce type de cotisations nécessite un acte d'autorité publique pour produire tous ses effets. De ce fait, la Commission considère, à ce stade, qu'il s'agit en l'espèce de taxes parafiscales, c'est-à-dire de ressources publiques.
- (29) En ce qui concerne le soutien apporté pour l'aide à la reconversion, la Commission considère également, à ce stade, qu'il s'agit de ressources publiques en ce que ce soutien était directement accordé par l'État.

- (30) Dans la mesure où des ressources publiques auraient été utilisées pour financer des avantages pour des entreprises spécifiques, leur notification à la Commission constitue une obligation découlant de l'article 88, paragraphe 3, du traité.
- (31) Les autorités françaises n'ont pas notifié à la Commission, au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité, les dispositifs instaurant lesdites cotisations ni l'aide aux coûts de la reconversion. Dès lors, si les mesures mises à exécution par la France contenaient des éléments d'aide d'État, il s'agira d'aides nouvelles, non notifiées à la Commission et, de ce fait, illégales au sens de l'article 1^{er}, point f), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 (devenu article 88) du traité CE ⁽¹¹⁾.
- (32) Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sauf dérogations prévues par ce traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
- (33) Le soutien accordé semble, à ce stade, favoriser certaines entreprises en ce sens que l'aide a été seulement accordée aux producteurs des AOC opérant dans certaines régions déterminées.
- (34) Il apparaît que ces aides sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale au détriment de la production des autres États membres. En effet, le secteur viticole est extrêmement ouvert à la concurrence au niveau communautaire et, donc, très sensible à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre.
- (35) Le fait qu'il y ait des échanges entre États membres dans le secteur vitivinicole semble à ce stade bien démontré par l'existence d'une organisation commune des marchés dans le secteur.
- (36) Le tableau suivant montre, à titre d'exemple, le niveau des échanges commerciaux des produits viticoles entre la France et les autres États membres lors des deux dernières années des reconversions mentionnées en France.

1999/2000	Vin	
	UE-15	France
Production utilisable	1 68 076 000 hl	54 271 000 hl
Exportations vers UE-15	—	15 500 000 hl
Importations de UE-15	—	5 700 000 hl

- (37) À ce stade, il semble donc s'agir de mesures qui relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

2. Compatibilité de l'aide

- (38) Le principe d'incompatibilité énoncé à l'article 87, paragraphe 1, connaît toutefois des exceptions.
- (39) Les dérogations prévues au paragraphe 2 de l'article 87 concernant, notamment, les aides à caractère social et les aides visant à compenser des dommages causés par un désastre naturel ou par un événement exceptionnel ne semblent manifestement pas applicables.
- (40) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales. Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission pourrait établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause.
- (41) La Commission considère que les aides en cause ne sont pas destinées à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a). Elles ne sont pas non plus destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Les aides ne sont pas non plus destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d).
- (42) La seule dérogation envisageable à ce stade pour le cas d'espèce est celle de l'article 87, paragraphe 3, point c), qui prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
- (43) D'après le point 23.3 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (ci-après dénommées «les lignes directrices agricoles») ⁽¹²⁾ et la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales, toute aide illégale au sens de l'article 1^{er}, point f), du règlement (CE) n° 659/1999 doit être évaluée conformément aux règles et aux lignes directrices en vigueur au moment où l'aide est accordée.
- (44) Les lignes directrices agricoles s'appliquent depuis le 1^{er} janvier 2000. Dès lors, toute aide octroyée après cette date devra être jugée à la lumière des lignes directrices. En revanche, toute aide octroyée avant cette date devra, le cas échéant, être jugée à la lumière des dispositions et de la pratique applicable avant le 1^{er} janvier 2000.

⁽¹¹⁾ JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

⁽¹²⁾ JO C 28 du 1.2.2000 et rectificatif (JO C 232 du 12.8.2000).

- (45) Le point 3.2 des lignes directrices agricoles prévoit que, même si les articles 87, 88 et 89 sont pleinement applicables aux secteurs couverts par les organisations communes des marchés, leur application reste toutefois soumise aux dispositions établies par les règlements concernés. Autrement dit, le recours par un État membre aux dispositions des articles 87, 88 et 89 ne peut l'emporter sur l'application des dispositions du règlement régissant l'organisation des marchés en cause ⁽¹³⁾. La Commission doit aussi examiner si une aide ne contrarie pas le bon fonctionnement des marchés considérés et serait dès lors incompatible avec le marché commun.
- (46) En ce qui concerne les aides prévues à l'intérieur du Plan Rivesaltes, celles-ci ont été octroyées entre le 1^{er} janvier 1997 et le 31 juillet 2000, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur, le 1^{er} août 2000, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ⁽¹⁴⁾. Puisqu'il s'agit de mesures rentrant dans le champ d'application de l'organisation commune du marché vitivinicole, elles doivent être examinées à la lumière de la législation en vigueur à l'époque, c'est-à-dire, du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole ⁽¹⁵⁾ et de ses règlements d'application.
- (47) Pour ce qui est des aides à la «publi-promotion» mises en place pour certaines AOC, la compatibilité des aides octroyées avant le 1^{er} janvier 2002 devra être vérifiée à la lumière de l'encadrement des aides nationales à la publicité des produits agricoles et de certains produits ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE ⁽¹⁶⁾ et, pour les aides octroyées après cette date, à la lumière des lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I ⁽¹⁷⁾.
- (48) En ce qui concerne les aides d'État financées au moyen d'une taxe parafiscale, les actions financées par les aides ainsi que le financement des aides elles-mêmes doivent faire l'objet d'un examen par la Commission.

2.1. Aides

2.1.1. Prime de gel

- (49) Cette prime de gel a été financée par une cotisation interprofessionnelle pour la reconversion viticole. La prime avait pour but d'indemniser les producteurs pour les pertes de revenus entraînées par leur engagement à ne plus revendiquer l'AOC Rivesaltes et réorienter leur production vers des vins de table et des vins de pays.

⁽¹³⁾ Arrêt de la Cour de justice du 26 juin 1979 dans l'affaire 177/78, Pigs and Bacon Commission contre McCarren and Company Limited, Rec. 1979, p. 2161.

⁽¹⁴⁾ JO L 179 du 14.7.1999.

⁽¹⁵⁾ JO L 84 du 27.3.1987. Règlement abrogé par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune de marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1).

⁽¹⁶⁾ JO C 302 du 12.11.1987.

⁽¹⁷⁾ JO C 252 du 12.9.2001.

- (50) L'article 76 du règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché vitivinicole (OCM), applicable au moment de l'octroi des aides, prévoyait que, sauf dispositions contraires dudit règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité (devenus les articles 87, 88 et 89) étaient applicables à la production et au commerce des produits viticoles.

- (51) Or, des primes de gel telles que celles prévues par le dispositif d'aide français n'étaient pas prévues par l'OCM et, plus concrètement, par le règlement (CEE) n° 456/80 du Conseil du 18 février 1980 relatif à l'octroi de primes d'abandon temporaire et d'abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne ainsi que de primes de renonciation à la replantation ⁽¹⁸⁾. Ce règlement prévoyait uniquement une prime à l'abandon temporaire ou définitif de la production, payable lorsqu'un producteur décidait de contribuer à la diminution du potentiel viticole communautaire au moyen, notamment, de l'arrachage des vignes.

- (52) La Commission constate que la mesure française n'avait pas pour objet la diminution de la production de vin mais uniquement la non-revendication de l'AOC Rivesaltes. De ce fait, puisque aucune diminution du potentiel viticole n'est intervenue et qu'aucune action d'abandon n'a été financée par la prime, la mesure ne semble pas, à ce stade, rentrer dans le champ d'application de l'ancienne OCM vitivinicole.

- (53) Bien que l'application du règlement (CEE) n° 456/80 semble exclue du fait du non abandon de la production, la mesure doit être examinée à la lumière d'autres dispositions horizontales en matière d'aides d'État. En effet, l'article 17 du règlement (CEE) n° 456/80 précisait que les dispositions dudit règlement ne faisaient pas obstacle à l'octroi d'aides prévues par les réglementations nationales et destinées à atteindre des objectifs analogues à ceux qui sont poursuivis par ce règlement, sous réserve d'un examen au titre des articles 92, 93 et 94 du traité (devenus articles 87, 88 et 89).

- (54) La mesure en l'espèce ne prévoyait pas d'abandon de la production. Elle ne peut donc, à ce stade, être assimilée à une mesure destinée à atteindre des objectifs analogues à ceux qui sont poursuivis par le règlement (CEE) n° 456/80, autrement dit, à la diminution du potentiel viticole.

- (55) L'aide nationale aurait eu pour but de soulager financièrement les producteurs qui auraient, en tant qu'entrepreneurs, décidé librement de s'engager dans une démarche purement commerciale, dont les charges semblent constituer des dépenses liées à l'exercice de l'activité économique.

- (56) Selon la pratique constante de la Commission applicable avant l'adoption des lignes directrices agricoles le 1^{er} janvier 2000, et selon la jurisprudence de la Cour de justice ⁽¹⁹⁾, les aides au fonctionnement sont celles qui visent à libérer une entreprise des coûts qu'elle-même aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa

⁽¹⁸⁾ JO L 57 du 29.2.1980.

⁽¹⁹⁾ Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juin 1995 dans l'affaire T-459/93, Siemens SA contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1995, p. II-1675.

gestion courante ou de ses activités normales. Le Tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les aides au fonctionnement ne peuvent en aucun cas être déclarées compatibles avec le marché commun, en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, dans la mesure où elles risquent, par leur nature même, d'altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

- (57) Cette idée est reprise dans le point 3.5 des lignes directrices agricoles qui prévoit que les aides d'État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles accordées sur la seule base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de moyens de production sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun. Le point 3.5 ajoute qu'il s'agit là, intrinsèquement, d'aides susceptibles d'interférer avec les mécanismes qui régissent les organisations communes des marchés.
- (58) La Commission constate, à ce stade, que l'aide a été octroyée à l'hectare par an et qu'elle est donc étroitement liée à la quantité de vin produite.
- (59) La Commission considère, à ce stade, que la prime de gel semble constituer une aide au fonctionnement susceptible d'interférer avec les mécanismes qui régissaient l'OCM vitivinicole et que, pour cette raison, elle pourrait être incompatible avec les règles de marché et de concurrence applicables.

2.1.2. L'aide à la reconversion proprement dite

- (60) L'article 14 du règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché vitivinicole prévoyait que toute aide nationale pour les plantations de vignobles serait interdite à partir du 1^{er} septembre 1988, à l'exception de celles répondant à des critères devant, notamment, permettre d'atteindre l'objectif de la diminution de la quantité de la production ou de l'amélioration qualitative sans entraîner d'augmentation de la production. De ce fait, l'article 3 dudit règlement prévoyait que seules seraient admises les variétés de vignes étant amélioratrices et n'ayant pas une productivité élevée dans le terroir concerné.
- (61) Le règlement (CEE) n° 2741/89 de la Commission du 11 septembre 1989 fixant les critères à retenir dans le cadre de l'article 14 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil en ce qui concerne les aides nationales à la plantation de superficies viticoles ⁽²⁰⁾ établit les critères à partir desquels sont examinés les projets d'aides nationales à la plantation de superficies viticoles admissibles au titre des articles 92, 93 et 94 du traité (devenus articles 87, 88 et 89).
- (62) L'article 2 du règlement prévoit que les projets d'aides nationales doivent démontrer de façon satisfaisante le respect de l'objectif, visé à l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 822/87, de diminution de la quantité de la production ou de l'amélioration qualitative sans entraîner d'augmentation de la production.

- (63) L'article 3 prévoit que la plantation doit être faite avec une variété qui, dans le terroir concerné: n'est pas considérée comme étant de productivité élevée, est reconnue comme étant amélioratrice et est spécifiquement autorisée par les autorités nationales dans le cadre du projet d'aide en question.
- (64) À ce stade, la Commission n'a pas reçu, de la part des autorités françaises, d'informations concernant les variétés utilisées dans les reconversions, bien que d'autres informations dont la Commission dispose lui permettent, à ce stade, de ne pas exclure que lesdites variétés répondent aux caractéristiques exigées par la réglementation communautaire applicable au moment de l'octroi des aides. La Commission devrait toutefois disposer d'informations précises lui permettant de conclure que les variétés visées étaient de nature à améliorer la production et n'étaient pas de nature à augmenter le volume de production viticole par hectare. En outre, la Commission ne dispose pas, à ce stade, d'une confirmation de la part des autorités françaises sur le fait que les variétés utilisées ont été préalablement autorisées par celles-ci.
- (65) L'article 5 du règlement (CEE) n° 2741/89 de la Commission prévoyait, quant à lui, que le montant de l'aide attribuée par hectare de vigne plantée ne pouvait pas dépasser 30 % des coûts réels d'arrachage et de plantation. Les coûts à prendre en considération pour l'attribution de l'aide pouvaient être déterminés de façon forfaitaire dans chaque région, notamment en fonction des caractéristiques géomorphologiques.
- (66) Selon les informations fournies par les autorités françaises, l'aide nationale retenue pour l'amélioration de l'encépagement dans la région concernée a été la suivante:
- 24 000 FRF/ha pour la reconversion du vignoble en AOC Muscat de Rivesaltes,
 - 40 000 FRF/ha pour la reconversion du vignoble en AOC Côtes du Roussillon Villages et en vins de pays.
- (67) Selon les autorités françaises, les coûts réels d'arrachage et de replantation de vignobles dans cette région s'élevaient, en moyenne, à 110 000 FRF/ha.
- (68) Puisque le coût total de la reconversion réalisée aurait été, d'après les autorités françaises, de 258 500 000 FRF et que les pouvoirs publics auraient contribué à hauteur de 75 250 000 FRF ainsi répartis:
- reconversion AOC Muscat de Rivesaltes: 1 250 ha × 25 000 FRF = 31 250 000 FRF,
 - reconversion AOC Côtes du Roussillon Villages et vins de pays: 1 100 ha × 40 000 FRF = 44 000 000 FRF,

les autorités françaises concluent que, tous financements confondus, les pouvoirs publics auraient contribué à hauteur de 29,11 % aux coûts de la reconversion effectivement réalisée. Ainsi, les autorités françaises concluent que le montant total de l'aide n'a pas dépassé le plafond de 30 % prévu par la législation communautaire.

⁽²⁰⁾ JO L 264 du 12.9.1989.

- (69) Or, l'article 5 du règlement (CEE) n° 2741/89 de la Commission prévoyait que l'élément pertinent pour le calcul des coûts de reconversion était celui de l'aide effectivement attribuée par hectare de vigne plantée.
- (70) À ce stade, cette logique semble exclure les calculs globaux au niveau de l'exercice de reconversion pris dans sa totalité et, par conséquent, les calculs basés sur la moyenne par hectare des coûts totaux. En outre, les autorités françaises calculent cette moyenne par rapport à des actions de reconversion différenciées, ce qui ne semble pas être l'esprit de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2741/89.
- (71) La Commission considère à ce stade que, compte tenu des coûts par hectare avancés par les autorités françaises (110 000 FRF/ha), les aides octroyées en l'espèce auraient dû être plafonnées respectivement à 33 000 FRF/ha et à 30 % des coûts réels encourus par les producteurs au niveau individuel.
- (72) Il s'ensuit que tout dépassement de 30 % des coûts réels et/ou du plafond de 33 000 FRF/ha, pourrait, dans des cas individuels, constituer une aide d'État incompatible avec les règles applicables. À ce stade, la Commission ne peut que prendre note du fait que, d'après les autorités françaises, les aides pour la reconversion AOC Côtes du Roussillon Villages et vins de pays ont été de 40 000 FRF/ha.
- (73) L'article 7 prévoit que l'État membre communique à la Commission, lors de la notification des projets d'aides nationales au titre de l'article 88 du traité, les renseignements relatifs à la mise en application des aides en question ainsi que toutes les données nécessaires à la vérification de l'objectif prévu à l'article 14, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 822/87, notamment les données relatives à l'évolution envisagée du potentiel de production.
- (74) La Commission réitère que les aides à la reconversion n'ont pas été notifiées à la Commission dans le cadre de l'article 88 du traité et que des données telles que celles relatives à l'évolution envisagée du potentiel de production ne lui ont pas été envoyées.
- (75) Enfin, l'article 8 du règlement prévoit que l'État membre communique annuellement à la Commission les renseignements suivants, ventilés par unité géographique: nombre de viticulteurs ayant bénéficié d'aides nationales à la plantation de superficies viticoles, superficie concernée ventilée par catégorie de sol, part de cette superficie pour laquelle la plantation a été précédée d'un arrachage, part de cette superficie reconnue apte à la production de v.q.p.r.d., destination des superficies plantées (raisins de cuve, de table, à sécher, pépinière ou vigne mère de porte-greffe, etc.) et variétés utilisées.
- (76) La Commission constate que cette obligation de rapport annuel n'a pas été respectée par les autorités françaises et que les renseignements exigés ne lui ont pas été envoyés.
- (77) En vertu des facultés dont elle dispose au titre de l'article 10 du règlement (CE) n° 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 (devenu article 88) du traité CE, la Commission, afin d'être en mesure d'examiner ce dispositif d'aide, enjoint aux autorités françaises de lui envoyer toutes les informations nécessaires concernant les deux reconversions effectuées. Cela doit comprendre les renseignements concernant le nombre de viticulteurs ayant bénéficié d'aides nationales à la plantation de superficies viticoles, la superficie concernée ventilée par catégorie de sol, la part de cette superficie pour laquelle la plantation a été précédée d'un arrachage, la part de cette superficie reconnue apte à la production de v.q.p.r.d., la destination des superficies plantées (raisins de cuve, de table, à sécher, pépinière ou vigne mère de porte-greffe, etc.), les variétés utilisées, la preuve de l'autorisation préalable des autorités françaises pour l'utilisation desdites variétés, l'évolution du potentiel de production et, toute information opportune concernant le niveau de l'aide.
- 2.1.3. Aides à la «publi-promotion» et fonctionnement des AOC concernées
- (78) Les autorités françaises ont signalé que le dispositif réglementaire relatif à la taxe parafiscale destinée au financement du CIVDN a fait l'objet de notifications régulières et a déjà fait l'objet d'examen et approbation par la Commission.
- (79) En effet, la Commission a approuvé en dernier lieu, dans le cadre de l'aide d'État N 184/97 ⁽²¹⁾ et pour une période allant jusqu'à la fin de 2002, une aide d'État financée par une taxe parafiscale pour couvrir, entre autres, des actions «publi-promotionnelles» et de fonctionnement au profit du CIVDN. Le dispositif initial avait été approuvé par la Commission en 1990, dans le cadre de l'aide d'État N 230/90 ⁽²²⁾. La Commission a alors conclu que les aides à la promotion collective visant à améliorer et à consolider l'image de marque des vins doux naturels auprès du consommateur et à développer les ventes étaient accordées en conformité avec les dispositions de l'encadrement des aides nationales à la publicité des produits agricoles et de certains produits ne relevant pas de l'annexe II du traité CEE, applicable à ce type d'aides. En outre, la Commission a considéré que les frais de fonctionnement se rapportaient aux dépenses administratives du Comité et n'étaient pas à considérer comme des aides en tant que telles.
- (80) Or, d'après les informations reçues, les cotisations, en l'espèce, sont perçues par le CIVDN en sus de la taxe parafiscale destinée aux actions de communication et de promotion déjà autorisée par la Commission. En d'autres termes, elles sont venues s'ajouter au régime existant tout en faisant l'objet d'une procédure d'approbation spécifique. De ce fait, la Commission considère à ce stade que l'autorisation donnée dans le cadre de l'aide d'État N 184/97 ne constitue pas une autorisation tacite de toute modification, voire de toute autre mesure qui viendrait s'ajouter à l'aide autorisée auparavant.

⁽²¹⁾ Lettre de la Commission SG(97)D/3741 du 16 mai 1997.

⁽²²⁾ Lettre de la Commission SG(D)(90) 25148 du 22 août 1990.

- (81) En effet, vu que le processus d'approbation et de mise en place de ces cotisations est celui instauré par les articles 6 et 7 de la loi 200 déjà mentionnée, il y a lieu de conclure, à ce stade, que la cotisation, en l'espèce, constitue une modification de l'aide autorisée, voire une nouvelle aide, qui aurait dû être notifiée à la Commission afin d'être examinée à la lumière des règles applicables.
- (82) La Commission ne peut pas exclure, à ce stade, que les actions «publi-promotionnelles» et de fonctionnement, en l'espèce, soient identiques dans leur nature à celles déjà autorisées par la Commission. Toutefois, faute d'informations précises de la part des autorités françaises, la Commission n'est pas, à ce stade, en mesure de vérifier la compatibilité des aides «publi-promotionnelles» et de fonctionnement des AOC financées par les nouvelles cotisations.
- (83) La Commission ne dispose pas d'informations concernant la continuité du régime durant la période où celui-ci est encore applicable. Dans le cas où des aides auraient encore été payées après le 1^{er} janvier 2002, la Commission rappelle que toute aide payée après cette date devra être examinée à la lumière des lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I.
- (84) En vertu des facultés dont elle dispose au titre de l'article 10 du règlement (CE) n° 659/1999 portant modalités d'application de l'article 93 (devenu article 88) du traité CE, la Commission enjoint aux autorités françaises de lui envoyer les informations nécessaires concernant ces dispositifs d'aide, y compris les dispositifs non mentionnés et non notifiés et pouvant être actuellement en vigueur, afin de lui permettre d'apprécier leur compatibilité avec, notamment, les critères négatifs et positifs applicables en matière de publicité et de promotion et le niveau maximal d'aide pouvant être autorisé. Ces informations devraient aussi permettre à la Commission de mesurer, au niveau des exigences communautaires, les répercussions d'un éventuel cumul d'aides provoqué par le régime autorisé auparavant et les régimes d'espèce non notifiés.
- 2.2. Financement des aides
- (85) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice ⁽²³⁾, la Commission considère normalement que le financement d'une aide d'État par le biais de charges obligatoires peut avoir une incidence sur l'aide en ayant un effet protecteur allant au-delà de l'aide proprement dite. Les cotisations en question constituent en effet des charges obligatoires. Suivant cette même jurisprudence, la Commission considère qu'une aide ne peut être financée par des taxes parafiscales grevant également des produits importés des autres États membres.
- (86) La Commission a déjà conclu, notamment dans le cadre de l'aide d'État N 184/97, que le régime instauré par les autorités françaises ne frappait pas les produits importés.
- (87) Les régimes, en l'espèce, sont, dans leurs mécanismes, très similaires à celui déjà autorisé par la Commission. Il se dégage en plus des textes instaurant les taxes parafiscales en l'espèce que celles-ci frappent uniquement la production viticole d'une région déterminée.
- (88) Il est donc possible, à ce stade, de conclure qu'aucun produit importé n'est soumis, voire n'a été soumis, aux taxes parafiscales visées en l'espèce.

IV CONCLUSION

- (89) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission constate, après cet examen préliminaire, que la mesure suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun.
- (90) La Commission, après avoir examiné les informations fournies par les autorités françaises, a dès lors décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne les aides traitées dans la présente décision.
- (91) Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des mesures en question dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite les autorités françaises à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires potentiels de l'aide.
- (92) La Commission enjoint formellement aux autorités françaises de lui envoyer toutes les informations nécessaires à propos des différents régimes d'aides traités dans la présente décision, lui permettant d'examiner les régimes d'aide à la lumière des règles applicables et dont le contenu précis se trouve exposé aux considérants 77 et 84.
- (93) La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire. En outre, la dépense relative aux mesures nationales qui affectent directement des mesures communautaires pourra se voir refuser l'imputation au budget du FEOGA.»

⁽²³⁾ Arrêt de la cour de justice du 25 juin 1970 dans l'affaire 47/69, Gouvernement de la République française contre Commission des Communautés européennes, Rec. XVI, p. 487.

AYUDAS ESTATALES — ALEMANIA

Ayuda C 9/03 (ex NN 156/01) y (ex N 97/01) — Promoción de las agrupaciones bávaras de explotación conjunta de maquinaria agrícola**Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE**

(2003/C 82/03)

Por carta de 5 de febrero de 2003, reproducida en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Alemania su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con una parte de la medida antes citada.

La Comisión decidió no formular objeciones con respecto a otras partes de la medida, descrita en la carta que sigue al presente resumen.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la medida respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea
Dirección General de Agricultura
Dirección H
L 130 5/120
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 21 51.

Dichas observaciones serán comunicadas a Alemania. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

La medida considerada tiene por objeto asegurar una colaboración generalizada entre las explotaciones agrícolas y silvícolas a través de las agrupaciones de explotación conjunta de maquinaria y de asistencia mutua («Maschinen- und Betriebshilferinge», MR). Las MR son organizaciones de ayuda mutua de los agricultores, de ámbito local o regional, que organizan el intercambio de mano de obra agrícola y coordinan intercambios de maquinaria entre explotaciones.

Las MR prestan servicios, asimismo, en otros sectores, por ejemplo, servicios municipales tales como retirada de nieve, construcción/mantenimiento de carreteras, construcción de estaciones de depuración de aguas residuales, trabajos de jardinería y paisajismo o construcción de instalaciones deportivas y de campos de golf. Actualmente existe la percepción de que, a raíz de la creación de filiales (en el ámbito de la construcción, del comercio o de la fabricación de automóviles y maquinaria agrícola), las MR compiten con otras empresas industriales y comerciales.

Si bien las ayudas se canalizan a través del órgano central «Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilferinge eV» (KBM), que agrupa actualmente a 87 MR, actualmente parece que los principales beneficiarios de las mismas son las MR o los propios agricultores. Las MR reciben subvenciones del KBM destinadas a cubrir, en parte, sus gastos de material y de personal. Dichas subvenciones permiten reducir, por otra parte, la contribución de los agricultores a la financiación de las MR.

El régimen de ayudas notificado estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2005. La medida se financiará con recursos del

Estado federado de Baviera, y la ayuda consistirá en subvenciones directas decrecientes. La intensidad de la ayuda variará entre el 42 % (en 2001) y el 33 % (en 2005), y su importe máximo se reducirá gradualmente, pasando de 4,38 millones de euros en 2001 a 3,46 millones de euros en 2005. De las subvenciones recibidas, el KBM retendrá anualmente alrededor de 150 000 euros para cubrir los gastos administrativos.

En la medida en que el régimen notificado se limita a la prestación de asistencia social a las empresas, la Comisión estima que satisface las condiciones previstas en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario.

Es posible, sin embargo, que la medida comporte también una ayuda en favor del KBM y de las MR, así como en favor de los afiliados de éstas o de otras empresas a las que prestan servicios. Dado que los datos actualmente disponibles dan pie a pensar que estas ayudas constituyen ayudas de funcionamiento, incompatibles con el mercado común, la Comisión solicita a las autoridades alemanas que le remitan cuanta información estimen pertinente para evaluar el asunto.

Habida cuenta de la proximidad, o aun indiferenciación, existente entre las MR y sus filiales, tanto geográfica como en lo que respecta al personal, y de la insuficiente segregación entre el ámbito principal de actividad de las MR y otras actividades económicas, parece posible que el efecto de falseamiento de las ayudas se extienda también a otros sectores económicos (problema de las «subvenciones cruzadas»). La Comisión solicita a las autoridades alemanas que le remitan la información que estimen pertinente para evaluar el asunto y que le comuniquen las medidas que se propongan adoptar para eliminar el efecto de falseamiento de la competencia que se deriva de las ayudas.

CARTA

«Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass die Kommission nach Prüfung der von Ihren Behörden übermittelten Informationen zu den im Betreff genannten Maßnahmen beschlossen hat, das Verfahren gemäß Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

Der Entscheidung der Kommission liegen folgende Erwägungen zugrunde:

I. VERFAHREN

Die Maßnahme wurde mit Schreiben vom 31. Februar 2001 an die Kommission notifiziert. Weitere Informationen wurden mit Schreiben vom 11. Mai 2001, eingegangen am 16. Mai 2001, und mit Schreiben vom 9. Oktober 2001, eingegangen am 11. Oktober 2001, übermittelt.

Mit Schreiben vom 9. Oktober 2001 haben die deutschen Behörden mitgeteilt, dass die Maßnahme schon seit dem Jahr 1970 durchgeführt wird und die Durchführung der Maßnahme der Kommission lediglich im Rahmen von Jahresberichten mitgeteilt wurde. Die Beihilfe wurde daher in das Verzeichnis der nicht notifizierten Beihilfen übertragen.

II. BESCHREIBUNG

II.1 Rechtsgrundlage

Die Maßnahme wird auf Grundlage des Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Bayern und der Vereinbarung zur Durchführung der zwischenbetrieblichen Betriebshilfe und des zwischenbetrieblichen Maschineneinsatzes in der Land- und Forstwirtschaft durchgeführt.

II.2 Ziel der Maßnahme

Ziel der Maßnahme ist es, die durch die „Maschinen- und Betriebshilferinge“ (MR) organisierte zwischenbetriebliche Zusammenarbeit in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben flächendeckend sicherzustellen.

MR sind Selbsthilfeorganisationen der Landwirte auf lokaler bzw. regionaler Ebene, die in folgenden Kernbereichen tätig sind:

- Soziale Betriebshilfe:
Die MR organisieren den Austausch von landwirtschaftlichen Arbeitskräften bei Krankheit, Unfällen und sonstigen sozialen Notfällen auf landwirtschaftlichen Betrieben.
- Wirtschaftliche Betriebshilfe:
Die MR organisieren den Austausch von landwirtschaftlichen Arbeitskräften, vor allem um saisonale Arbeitsspitzen zu bewältigen und um Spezialarbeiten von zum Teil hoch qualifiziertem Personal durchzuführen, das auf den Betrieben vielfach nicht vorhanden ist.

- Zwischenbetrieblicher Maschineneinsatz:
Die MR organisieren und koordinieren den überbetrieblichen gegenseitigen Austausch von Maschinen. Dadurch ersparen sich die Betriebe den Ankauf eigener Spezialmaschinen, die speziell für Kleinbetriebe in vielen Fällen unwirtschaftlich sind.

Die Tätigkeit der MR beschränkt sich dabei auf die Vermittlung von Fachpersonal und Maschinen. Die eigentlichen Leistungen — wie der Maschinen- und Arbeitseinsatz — werden von Landwirten erbracht, die dafür ein entsprechendes Entgelt vom Unternehmen, das die Leistungen in Anspruch nimmt, erhalten.

Neben den oben beschriebenen sog. Kernbereichen sind die MR aber auch in anderen Sparten tätig (siehe Punkt II.6).

II.3 Begünstigte

Die Beihilfe wird ab dem Jahr 2001 an die Dachorganisation der Maschinenringe, das „Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilferinge e. V.“ (KBM), bezahlt. Der Dachorganisation gehören derzeit 87 MR an, die sich wiederum aus insgesamt 102 000 land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zusammensetzen. Das KBM erhält Zahlungen zur Erfüllung folgender Aufgaben:

- zentraler Ansprechpartner gegenüber dem Bayerischen Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten. Verwaltung der öffentlichen Mittel zugunsten der MR;
- Anstellung von hauptberuflichen Geschäftsführern und sonstigem Personal für die MR;
- Beratung und Unterstützung der MR in allen Fragen des überbetrieblichen Einsatzes von Maschinen und Arbeitskräften;
- Sicherstellung eines flächendeckenden Angebotes an den Leistungen der MR in ganz Bayern;
- Dienst- und Fachaufsicht über die Geschäftsführer der MR;
- Organisation der Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter der MR.

Die Maßnahme begünstigt jedoch aus derzeitiger Sicht in erster Linie die MR bzw. die Landwirte, denen von den MR Dienstleistungen angeboten werden. Die MR erhalten Zuschüsse vom KBM zur teilweisen Abdeckung ihrer Sach- und Personalkosten. Die Finanzierung der MR erfolgt einerseits über diese Zahlungen, andererseits aber auch über die Einziehung von Mitgliedsbeiträgen der Landwirte. Die Maßnahme könnte daher aus derzeitiger Sicht auch ein Beihilfeelement zugunsten der Landwirte bzw. Unternehmen beinhalten, die Leistungen der MR in Anspruch nehmen, da die Dienstleistungen dadurch möglicherweise unter dem Marktpreis angeboten werden können bzw. die Landwirte dadurch weniger bzw. nicht kostendeckende Mitgliedsbeiträge an die MR bezahlen.

II.4 Art und Ausmaß der Beihilfe

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Landes Bayern finanziert. Die Beihilfe wird in Form von direkten Zuschüssen gewährt.

Das KBM erhält jährlich Zuschüsse in folgender Höhe:

Jahr	Förderintensität ⁽¹⁾ maximal	Förderhöchstbetrag in Mio. EUR
2001	42 %	4,38
2002	40 %	4,15
2003	38 %	3,92
2004	36 %	3,69
2005	33 %	3,46

⁽¹⁾ Ausgedrückt in % der förderfähigen Gesamtkosten.

Von diesen Zuschüssen werden vom KBM jährlich rund 150 000 EUR zur Abdeckung des Verwaltungsaufwandes des KBM einbehalten. Die restlichen Zuschüsse dienen zur Abdeckung eines Teiles der Sach- und Personalaufwendungen der MR. Die förderfähigen Kosten auf Ebene der MR beschränken sich nach Angaben der deutschen Behörden auf die Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit den unter Punkt II.2 beschriebenen Kernbereichen der MR, d. h. auf soziale Betriebshilfe, wirtschaftliche Betriebshilfe und zwischenbetrieblichen Maschineneinsatz.

II.5 Dauer der Maßnahme

Die notifizierte Beihilferegelung wird bis 31. Dezember 2005 angewendet.

II.6 Gegen die Maßnahme vorliegende Beschwerden

Die Dienststellen der Kommission haben mehrere Beschwerden im Zusammenhang mit der Einführung der vorliegenden Beihilferegelung erhalten. Die Beschwerdeführer weisen darauf hin, dass die MR nicht nur in den unter Punkt II.2 beschriebenen Kernbereichen tätig sind, sondern daneben auch andere Dienstleistungen, wie kommunale Dienste (z. B. Schneeräumung, Straßenbau/Straßenerhaltung, Kläranlagenbau), Garten- und Landschaftspflege, Sport- und Golfplatzbau anbieten. Die MR würden zudem durch Gründung von Tochterunternehmen (etwa im Bereich des Bauhandwerks, des Handels oder der KFZ- und Landmaschinenwerkstätten) in Konkurrenz zu anderen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und des Handels treten.

Nach Ansicht der Beschwerdeführer sei durch die personelle und räumliche Nähe bzw. Einheit der MR zu ihren Tochterunternehmen sowie die ungenügende Abgrenzung der eigentlichen Kernbereiche der MR und anderen Wirtschaftstätigkeiten eine wirksame Trennung der aus staatlichen Mitteln geförderten und nicht geförderten Tätigkeitsbereiche nicht möglich. Dadurch entstehe eine wettbewerbsverzerrende Wirkung der Beihilfen auch auf andere Wirtschaftsbereiche (Problem der „Quersubvention“).

III. BEWERTUNG

III.1 Vorliegen einer Beihilfe

Gemäß Artikel 87 Absatz 1 sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gleich welcher Art gewährte Beihilfen, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, verboten, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.

Zum derzeitigen Stand der Untersuchungen scheinen diese Bedingungen erfüllt zu sein.

Die vorliegende Beihilfemaßnahme wird aus staatlichen Mitteln finanziert.

- a) Obwohl das KBM die Rechtsform eines eingetragenen Vereines hat und gemäß Vereinssatzung ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt, dürfte es sich bei dessen Aktivitäten um wirtschaftliche Tätigkeiten handeln (vgl. Punkt II.3). Es ist zwar auch denkbar, dass das KBM insbesondere in seiner Funktion als zentraler Ansprechpartner gegenüber dem Bayerischen Staatsministerium und Verwalter von Mitteln keine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, doch kann dies auf Grundlage der vorliegenden Informationen nicht endgültig beurteilt werden. Das KBM ist somit nach den derzeit vorliegenden Informationen als Unternehmen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 einzustufen ⁽¹⁾. Im derzeitigen Verfahrensstand scheinen die Aktivitäten des KBM nicht die Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen des Anhangs I EG-Vertrag zu betreffen.

Die Auswahl des KBM scheint nicht anhand von Marktgrundsätzen erfolgt zu sein ⁽²⁾. Es ist beim vorliegenden Informationsstand nicht klar, ob das KBM für von ihm vorgenommene wirtschaftliche Tätigkeiten zu Marktpreisen entlohnt wird, oder ob es Zahlungen erhält, die über ein marktübliches Entgelt hinausgehen oder einen Zuschuss zu Betriebskosten darstellen, der kein marktübliches Entgelt für die vom KBM dem Land Bayern erbrachten Dienstleistungen ist. Die Gewährung öffentlicher Mittel an das KBM könnte

⁽¹⁾ Nach ständiger Rechtsprechung umfasst der Begriff des Unternehmens im Rahmen des Wettbewerbsrechts jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Einheit unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art ihrer Finanzierung (siehe u. a. Urteil vom 12. September 2000 in den verbundenen Rechtssachen C-180/98 bis C-184/98, Pavlov u. a., Slg. 2000, I-6451, Randnr. 74). Nach ebenfalls ständiger Rechtsprechung ist eine wirtschaftliche Tätigkeit jede Tätigkeit, die darin besteht, Güter oder Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt anzubieten (Urteile vom 16. Juni 1987 in der Rechtssache 118/85, Kommission/Italien, Slg. 1987, 2599, Randnr. 7, und vom 18. Juni 1998 in der Rechtssache C-35/96, Kommission/Italien, Slg. 1998, I-3851, Randnr. 36, sowie das zitierte Urteil Pavlov u. a., Randnr. 75).

⁽²⁾ Die Auswahl sollte — um ein Beihilfeelement ausschließen zu können — anhand von Marktgrundsätzen unter Ausschluss jedweder Diskriminierung erfolgen, und zwar gegebenenfalls durch Ausschreibungsverfahren in Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht und insbesondere mit dem Fallrecht, mit einem Grad an Werbung, der eine Öffnung des Dienstleistungsmarktes für den Wettbewerb und eine Prüfung der Unparteilichkeit der Auftragsvergabeverfahren ermöglicht.

daher möglicherweise Beihilfeelemente zugunsten des KBM enthalten. Um diese Frage genau zu prüfen, sind weitere Informationen notwendig. Die Kommission fordert daher die deutschen Behörden auf, alle sachdienlichen Hinweise zur Beurteilung dieser Frage zu übermitteln.

- b) Im Fall der MR ist es zum derzeitigen Stand des Verfahrens offensichtlich, dass es sich dabei um Unternehmen im Sinn von Artikel 87 Absatz 1 handelt, da diese bestimmte Dienstleistungen (z. B. Maschinenvermittlung, Austausch von Arbeitskräften sowie andere wirtschaftliche Tätigkeiten) auf einem Markt anbieten. Diese Dienstleistungen können beispielsweise mit der Tätigkeit eines Immobilienmaklers verglichen werden, der Anbieter und Nachfrager zusammenbringt. Auch die Aktivitäten der MR stehen nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen des Anhangs I EG-Vertrag.

Es ist beim vorliegenden Informationsstand unklar, ob

- i) die MR ihre Dienstleistungen den Landwirten grundsätzlich zu Marktpreisen anbieten,
- ii) ob die von der öffentlichen Hand über das KBM an die MR gewährten öffentlichen Mittel ausschließlich dazu verwendet werden, die Kosten der Dienstleistung gegenüber den Landwirten zu senken, sodass allein von einer Beihilfe an die Landwirte (siehe Buchstabe c) ausgegangen werden könnte, oder
- iii) ob die MR als Unternehmen selbst im Rahmen der über das KBM gewährten Mittel Beihilfen bekommen, die nicht als Beihilfen an Landwirte als Letztbegünstigte verstanden werden können.

Im derzeitigen Verfahrensstand und auf der Basis der vorliegenden Informationen ist daher anzunehmen, dass die Maßnahme mit den MR bestimmte Unternehmen in Bayern begünstigt und somit geeignet ist, den Wettbewerb mit den von MR angebotenen Dienstleistungen zu verfälschen, da die betreffenden Dienstleistungen auch grenzüberschreitend angeboten werden könnten.

Problem der Quersubvention

Außerdem ist zu klären, ob die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche der MR klar voneinander getrennt werden können und die Zahlungen staatlicher Beihilfen an die MR nicht zu Wettbewerbsverzerrungen in anderen Wirtschaftssektoren (d. h. in Tätigkeitsbereichen außerhalb der offiziellen Kernbereiche der Maschinenringe) führen. Nach dem derzeitigen Stand der Untersuchungen und nach Angaben der Beschwerdeführer scheint dies der Fall zu sein (vgl. Punkt II.6). Für eine nähere Prüfung sind weitere Informationen not-

wendig. Die Kommission fordert daher die deutschen Behörden auf, alle sachdienlichen Hinweise zur Beurteilung dieser Frage zu übermitteln.

- c) Darüber hinaus dürfte die Maßnahme entweder direkt (in Form von den an Landwirte unterhalb des Marktpreises angebotenen Dienstleistungen), zumindest aber indirekt den Mitgliedsbetrieben der MR (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) zugute kommen. Die bayerische Landwirtschaft ist für sich allein ein großer Hersteller von Agrarprodukten und darüber hinaus intensiv im grenzüberschreitenden Handel mit Agrarprodukten tätig. Beim vorliegenden Stand der Informationen ist die Maßnahme somit geeignet, den Wettbewerb zu verfälschen⁽³⁾ und den Handel mit Agrarprodukten zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen⁽⁴⁾.

Schlussfolgerung

Die Kommission ist daher beim derzeitigen Stand des Verfahrens der Auffassung, dass sowohl an das KBM als auch die MR und die Landwirte Beihilfen gewährt werden, die den Tatbestand des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag erfüllen, weil sie durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen und Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen und den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen.

III.2 Anwendbarkeit von Artikel 87 Absatz 2 und 3 EG-Vertrag

Es ist daher zu prüfen, ob eine der Ausnahmen bzw. Freistellungen von dem grundsätzlichen Beihilfeverbot gemäß Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag zur Anwendung kommen kann.

Die Ausnahmetatbestände der Artikel 87 Absatz 2 und Artikel 87 Absatz 3 Buchstaben a), b) und d) scheinen aus derzeitiger Sicht nicht anwendbar zu sein, da es sich weder um

— Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in denen die Lebenshaltung außergewöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche Unterbeschäftigung herrscht, noch um

— Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse oder zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats oder

⁽³⁾ Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs deutet die Verbesserung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens aufgrund einer staatlichen Beihilfe im Allgemeinen auf eine Wettbewerbsverzerrung gegenüber konkurrierenden Unternehmen hin, die keine solche Unterstützung erhalten (Rs. C-730/79, Slg. 1980, S. 2671, Rn. 11 und 12).

⁽⁴⁾ Der innergemeinschaftliche Handel Deutschlands mit Agrarerzeugnissen betrug im Jahr 1999 28 329 Mio. EUR (Importe) und 18 306 Mio. EUR (Exporte). Für das Land Bayern sind keine Daten verfügbar (Quelle: Eurostat und GD AGRI).

— Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes, soweit sie die Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in einem Maß beeinträchtigen, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft,

handelt.

Den einzigen möglicherweise anwendbaren Ausnahmetatbestand stellt daher Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c) dar.

a) *Etwaige Beihilfen an den KBM und die MR*

Es ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht klar, ob und in welchem Ausmaß die Zahlungen an das KBM über ein marktübliches Entgelt hinausgehen oder einen Zuschuss zu Betriebskosten darstellen, der kein marktübliches Entgelt für die vom KBM dem Land Bayern erbrachten Dienstleistungen ist. Es ist daher auch unklar, ob die Beihilfen in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 69/2001 vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen⁽⁵⁾ fallen.

Der Kommission liegen derzeit keine Informationen vor, wonach derartige Beihilfen an Investitionen oder sonstige förderfähige Ausgaben gebunden sind, oder unter die Verordnung (EG) Nr. 70/2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen⁽⁶⁾ fallen. Daher wären diese Beihilfen als Betriebsbeihilfen einzustufen, die mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar sind⁽⁷⁾.

Ähnliches gilt sinngemäß für die Zahlungen an die MR.

b) *Beihilfen an Landwirte*

Soweit derzeit ersichtlich, könnten die gewährten Beihilfen, insoweit sie Landwirten zugute kommen, allein auf der Grundlage von Kapitel 14 des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen im Agrarsektor⁽⁸⁾ genehmigt werden. Kapitel 14 des Gemeinschaftsrahmens betrifft die Bereitstellung von fachlicher oder gewerblicher Hilfe im Agrarsektor (d. h. an Landwirte). Gemäß Punkt 14.1 des Gemeinschaftsrahmens dürfen etwa Beihilfen für Betriebsführungs- und Vertretungsdienste bis zu einem höchstzulässigen Satz von 100 % gewährt werden, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Beihilfen sollten grundsätzlich allen zuschussfähigen natürlichen und juristischen Personen in dem betreffen-

den Gebiet auf der Grundlage objektiv definierter Kriterien zur Verfügung stehen.

2. Der zu gewährende Gesamthilfebeitrag sollte 100 000 EUR pro Begünstigten über einen Zeitraum von drei Jahren nicht überschreiten, und der höchstzulässige Beihilfesatz zugunsten von Unternehmen, die in den Anwendungsbereich der von der Kommission festgelegten Definition der kleinen und mittleren Unternehmen⁽⁹⁾ (KMU) fallen, sollte 50 % der zuschussfähigen Kosten nicht überschreiten, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Zur Berechnung des Beihilfebetrags wird der Begünstigte als die Person angesehen, die solche Dienste in Anspruch nimmt.

Ad 1: *Verfügbarkeit*

Die deutschen Behörden haben mit Schreiben vom 11. Mai 2001 mitgeteilt, dass bestimmte von den MR angebotenen Dienstleistungen (insbesondere die soziale Betriebshilfe) allen Interessierten — auch Nichtmitgliedern — zur Verfügung stehen. Dies gilt jedoch nicht für alle Dienstleistungen im gleichen Maße.

Ad 2: *Beihilfehöchstbetrag*

Die deutschen Behörden haben ausdrücklich zugesichert, dass der Gesamthilfebeitrag nicht 100 000 EUR pro Begünstigten über einen Zeitraum von drei Jahren überschreitet und der höchstzulässige Beihilfesatz zugunsten von Unternehmen, die in den Anwendungsbereich der von der Kommission festgelegten Definition der KMU fallen, nicht 50 % der zuschussfähigen Kosten überschreitet.

Die Kommission nimmt daher zur Kenntnis, dass die Beihilferegelung hinsichtlich der von den MR angebotenen sozialen Betriebshilfe zugunsten von landwirtschaftlichen Betrieben die Bedingungen des Gemeinschaftsrahmens erfüllt.

Aus derzeitiger Sicht hegt die Kommission jedoch ernsthafte Zweifel, ob auch Beihilfen für die wirtschaftliche Betriebshilfe und den zwischenbetrieblichen Maschineneinsatz auf der Basis von Kapitel 14 des Gemeinschaftsrahmens genehmigt werden können. Im derzeitigen Stadium der Untersuchung scheint es sich bei solchen Beihilfen vielmehr um Betriebsbeihilfen zugunsten landwirtschaftlicher Erzeuger zu handeln.

Punkt 3.5 des Gemeinschaftsrahmens sieht vor, dass einseitige staatliche Beihilfemaßnahmen, die lediglich dazu bestimmt sind, die finanzielle Situation der Erzeuger zu verbessern, die aber nicht in irgendeiner Weise zur Entwicklung des Sektors insgesamt beitragen, und vor allem Beihilfen, die allein auf der Grundlage des Preises, der Menge, der Produktionseinheit oder der Betriebsmitteleinheit gewährt werden, als Betriebsbeihilfen anzusehen sind, die mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar sind⁽¹⁰⁾.

⁽⁵⁾ ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 30.

⁽⁶⁾ ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33.

⁽⁷⁾ Wie der Gerichtshof und das Gericht ausgeführt haben, verfälschen Betriebsbeihilfen, also Beihilfen, mit denen ein Unternehmen von Kosten befreit werden soll, die es normalerweise im Rahmen seines laufenden Betriebes oder seiner üblichen Tätigkeiten hätte tragen müssen, grundsätzlich die Wettbewerbsbedingungen (Urteil des Gerichts vom 8. Juni 1995 in der Rechtssache T-459/93, Siemens/Kommission, Slg. 1995, II-1675, Randnrn. 48 und 77, und die dort genannte Rechtsprechung).

⁽⁸⁾ Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen im Agrarsektor (ABl. C 232 vom 12.8.2000, S. 19).

⁽⁹⁾ Siehe Fußnote 7.

⁽¹⁰⁾ Siehe auch Fußnote 8.

Außerdem könnten die Beihilfen für soziale Betriebshilfe auch andere als landwirtschaftliche Unternehmen begünstigen und damit nicht in den Geltungsbereich des Gemeinschaftsrahmens fallen. Die Kommission fordert daher die deutschen Behörden auf, alle sachdienlichen Hinweise zur Beurteilung dieser Frage zu übermitteln.

III.3 In der Vergangenheit gewährte Beihilfen

Nach Angaben der deutschen Behörden werden schon seit 1970 Beihilfen an das KBM und die MR (bzw. an Landwirte) bezahlt.

Vor dem Inkrafttreten des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen im Agrarsektor hat die Kommission für die Beurteilung derartiger Beihilfen materiell ähnliche Bestimmungen angewendet, insbesondere für „De-minimis“-Beihilfen⁽¹⁾ und Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen⁽²⁾. Im Agrarsektor ist es seit längerem bestehende Politik der Kommission, Beihilfen für Betriebsführungs- und Vertretungsdienste auf landwirtschaftlichen Betrieben bis zu einer maximalen Beihilfeintensität von 100 % zu genehmigen⁽³⁾.

Gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 659/99⁽⁴⁾ gelten die Befugnisse der Kommission zur Rückforderung von Beihilfen für eine Frist von zehn Jahren. Da zum derzeitigen Zeitpunkt keine genauen Informationen darüber vorliegen, an welche Begünstigten bzw. in welcher Höhe diese Zahlungen durchgeführt wurden, werden die deutschen Behörden aufgefordert, eine detaillierte Aufstellung der seit 1992 gewährten Zahlungen an die Kommission zu übermitteln. Darüber hinaus fordert die Kommission die deutschen Behörden auf, alle sonstigen Informationen, die für eine Beurteilung dieser Maßnahme notwendig sind, vorzulegen.

Schlussfolgerung

Da die Maßnahme hinsichtlich der sozialen Betriebshilfe mit Ziffer 14 des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen im Agrarsektor im Einklang steht, kann sie als gemäß Artikel

87 Absatz 3 Buchstabe c) des Vertrags mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden. Die Kommission hat daher keine Einwände gegen diese Beihilfe.

Die Kommission hat jedoch Bedenken betreffend der Vereinbarkeit der angemeldeten Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt, soweit sie nicht die soziale Betriebshilfe betreffen.

IV. BESCHLUSS

Aus den oben dargelegten Gründen fordert die Kommission Deutschland gemäß dem Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag auf, innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang dieses Schreibens Stellung zu nehmen und ihr alle sachdienlichen Informationen zu übermitteln, die eine Beurteilung der Maßnahme ermöglichen.

Die Kommission fordert die deutschen Behörden insbesondere auf, detaillierte Informationen zu den unter Punkt III der vorliegenden Entscheidung genannten Punkten zu übermitteln. Die Kommission fordert die deutschen Behörden außerdem auf, eine lückenlose Darstellung von Aktivitäten der Maschinenringe sowie deren Finanzierung und insbesondere die verrechneten Preise für Dienstleistungen an die Kommission zu übermitteln, die nicht im Rahmen der vorliegenden Beihilfemaßnahme gefördert werden. Insbesondere wird um eine detaillierte Darstellung ersucht, durch welche Maßnahmen eine Quersubvention dieser sonstigen Tätigkeitsbereiche in der Praxis verhindert wird.

Die Kommission fordert die deutschen Behörden außerdem auf, eine Kopie dieses Schreibens umgehend an die möglichen Beihilfeempfänger zu senden.

Die Kommission verweist Deutschland auf die aussetzende Wirkung von Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag sowie auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999, wonach alle zu Unrecht gewährten Beihilfen vom Empfänger zurückzufordern sind.»

⁽¹⁾ Zuletzt: Mitteilung der Kommission über De-minimis-Beihilfen (ABl. C 68 vom 6.3.1996, S. 9).

⁽²⁾ Zuletzt: Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (ABl. C 213 vom 23.7.1996, S. 4).

⁽³⁾ Siehe beispielsweise Beihilfen N 526/94, N 807/95, N 478/97, N 686/97 und N 64/98.

⁽⁴⁾ Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags (ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1).

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE

Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

(2003/C 82/04)

Fecha de adopción de la decisión: 7.3.2003

Estado miembro: Francia

Ayuda: N 481/02

Denominación: Ayudas del Conseil Général du Lot-en-Garonne para inversiones en la calidad de las aves de corral

Objetivo: Promover las inversiones en el sector de la carne y huevos de aves de corral

Presupuesto: 884 000 euros en tres años

Intensidad o importe de la ayuda: 20 % de los gastos subvencionables para la carne de aves de corral; 8 % de los gastos subvencionables para los huevos de aves de corral

Duración: Tres años

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 7.3.2003

Estado miembro: Italia

Ayuda: N 38/03

Denominación: Acuerdo interprofesional de 2002 sobre las patatas destinadas a la transformación y ayuda para el almacenamiento privado de patatas de consumo

Objetivo: Ayuda para el almacenamiento de patatas

Fundamento jurídico: Accordo interprofessionale 2002 per le patate destinate alla trasformazione industriale e aiuto all'ammasso privato di patate alimentari

Presupuesto: 7 746 353 euros

Intensidad o importe de la ayuda: Variable en función de la medida

Duración: Un año

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE

Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

(2003/C 82/05)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Fecha de adopción de la decisión: 3.12.2002

Estado miembro: Países Bajos (Provincia de los Países Bajos Meridionales)

Ayuda: N 414/02

Denominación: Rehabilitación de solares contaminados de antiguas fábricas de gas

Objetivo: Protección del medio ambiente

Fundamento jurídico: Artikel 76 Wet bodembescherming (Staatsblad 1996, 496; laatstelijk gewijzigd bij Staatsblad 2001, 517)

Presupuesto: Presupuesto total: 13,4 millones de euros

Duración: 2002-2005

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 11.12.2002

Estado miembro: Alemania (Baviera)

Ayuda: N 634/02

Denominación: Ayuda a favor de Grundig AG

Objetivo: Ayuda de salvamento

Fundamento jurídico: *Ad hoc*

Intensidad o importe de la ayuda: Garantía del 90 % para un préstamo de 45 millones de euros

Duración: Seis meses

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 11.12.2002

Estado miembro: Países Bajos

Ayuda: N 638/02

Denominación: Ayuda para la recogida de halones y de CFCs

Objetivo: Protección del medio ambiente. Las ayudas tienen por objeto reducir el coste que representa para las empresas la eliminación de los halones y los CFCs de manera segura para el medio ambiente

Fundamento jurídico: Ministeriële regeling Inzamelingsregeling CFK en halonen

Presupuesto: 20 millones de euros (excluidos 3 millones de euros para costes ejecutivos)

Intensidad o importe de la ayuda: 5 euros máximo por kg de gas; con una intensidad máxima del 50 %

Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2003

Otros datos: La Comisión consideró que el sistema favorecía a los dueños de halones y de CFCs. La ayuda compensa parcialmente a las empresas de recogida de gas por la prestación de un servicio a los dueños de esos gases

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 24.1.2003

Estado miembro: Italia (Toscana)

Ayuda: N 742/01

Denominación: Ahorro de energía y desarrollo de las energías renovables

Objetivo: Protección del medio ambiente: ahorro de energía

Fundamento jurídico: Deliberazioni della Giunta regionale 20 maggio 2002, n. 482, e 5 agosto 2002, n. 881

Presupuesto: 24 millones de euros

Intensidad o importe de la ayuda: 30 % del equivalente bruto de subvención

Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2007

Otros datos: Informe anual

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Fecha de adopción de la decisión: 27.11.2002

Estado miembro: España (País Vasco)

Ayuda: NN 66/01

Denominación: Ayuda a Fuselajes Aeronáuticos

Objetivo: Inversión regional/Ensamblaje de estructuras de aviones para la industria aeronáutica civil

Fundamento jurídico: Plan Interinstitucional de Promoción Económica; Artículo 49.7 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre

Presupuesto: Subvención de 6,03 millones de euros

Intensidad o importe de la ayuda: 17,35 % del equivalente neto de subvención

Duración: 2000-2003

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Notificación previa de una operación de concentración**(asunto COMP/M.3104 — Compass/Cremonini/JV)****Asunto susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado**

(2003/C 82/06)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1. El 28 de marzo de 2003 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo ⁽¹⁾, modificado por el Reglamento (CE) nº 1310/97 ⁽²⁾, la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que las empresas Compass Group plc («Compass»), del Reino Unido, y Cremonini Spa («Cremonini»), de Italia, adquieren el control conjunto, con arreglo a lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de la empresa italiana Moto Spa y de la empresa austriaca Autoplose Ges.mbh («las empresas en participación»), actualmente controladas por Compass, mediante la adquisición de acciones.

2. **Ámbito de actividad de las empresas implicadas:**

— Compass: prestación de servicios de alimentación en concesiones o bajo contrato, incluyendo áreas de servicio de autopistas.

— Cremonini: producción y venta al por mayor de alimentos y prestación de servicios de alimentación.

— Empresas en participación: prestación de servicios de alimentación en autopistas.

3. Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la concentración notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) nº 4064/89. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto. De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo ⁽³⁾, se hace notar que este caso es susceptible de ser tratado por el procedimiento establecido en dicha Comunicación.

4. La Comisión insta a los terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01/296 72 44] o por correo, indicando la referencia COMP/M.3104 — Compass/Cremonini/JV, a la dirección siguiente:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección B — Grupo operativo de operaciones de concentración
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel.

⁽¹⁾ DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; rectificación en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.

⁽²⁾ DO L 180 de 9.7.1997, p. 1; rectificación en el DO L 40 de 13.2.1998, p. 17.

⁽³⁾ DO C 217 de 29.7.2000, p. 32.

II

(Actos jurídicos preparatorios en aplicación del título VI del Tratado de la Unión Europea)

Iniciativa de la República Helénica con vistas a la adopción de un Reglamento del Consejo relativo a los procedimientos para modificar el Manual Sirene

(2003/C 82/07)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 66,

Vista la iniciativa de la República Helénica ⁽¹⁾,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo ⁽²⁾,

Considerando lo siguiente:

- (1) El Sistema de Información de Schengen, en lo sucesivo denominado el SIS, creado de conformidad con lo dispuesto en el título IV del Convenio de 1990 de Aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, en lo sucesivo denominado el *Convenio de Schengen*, constituye un instrumento fundamental para la aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen tal como ha sido integrado en el marco de la Unión Europea.
- (2) Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 92 del Convenio de Schengen, las partes nacionales de los Estados miembros no pueden intercambiar datos SIS directamente entre ellas; únicamente pueden intercambiar datos a través de la función de apoyo técnico de Estrasburgo. No obstante, resulta adecuado el intercambio bilateral o multilateral de determinada información adicional necesaria para ejecutar correctamente determinadas disposiciones del Convenio de Schengen. Dicha información adicional es precisa, en particular, en relación con la acción necesaria con arreglo a lo dispuesto en los artículos 25, 39, 46, 95 a 100, el apartado 3 del artículo 102, el apartado 3 del artículo 104, y los artículos 106, 107, 109 y 110 del Convenio de Schengen. Las oficinas Sirene de cada Estado miembro llevan a cabo el intercambio de dicha información.
- (3) El Manual Sirene constituye un conjunto de instrucciones, destinado a los operadores de las oficinas SIRENE de cada Estado miembro, que describe en detalle las normas y procedimientos que regulan el intercambio bilateral o multilateral de dicha información adicional.
- (4) Es necesario crear un procedimiento para modificar el Manual Sirene de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Tratados.
- (5) La base jurídica de dichas modificaciones consta de dos partes: el presente Reglamento basado en el artículo 66 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y una

Decisión del Consejo basada en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 30, las letras a) y b) del artículo 31 y la letra c) del apartado 2 del artículo 34 del Tratado de la Unión Europea. La razón de todo ello es que, tal como se establece en el artículo 92 del Convenio de Schengen, el SIS permitirá que las autoridades designadas por los Estados miembros dispongan, mediante un procedimiento de consulta automatizado, de descripciones de personas y de objetos para efectuar controles en la frontera y otros controles de policía y de aduanas dentro del país de conformidad con el Derecho nacional, así como a efectos de la expedición de visados y permisos de residencia y de la administración de la legislación de extranjería en el marco de la aplicación de las disposiciones sobre la circulación de personas. El intercambio de información adicional necesario para ejecutar las disposiciones del Convenio de Schengen mencionado en el anterior considerando 2, llevado a cabo por las oficinas Sirene de cada Estado miembro, contribuye asimismo a dichos objetivos, así como al de asistir en la cooperación policial en general.

- (6) El hecho de que la base jurídica necesaria para hacer posibles futuras modificaciones del Manual Sirene conste de dos instrumentos distintos no afecta al principio de que el SIS constituye, y debe seguir constituyendo, un solo sistema integrado de información y de que las oficinas Sirene deben seguir desempeñando sus cometidos de forma integrada.
- (7) Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento deben adoptarse de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión ⁽³⁾.
- (8) Debe celebrarse un acuerdo para permitir que los representantes de Islandia y Noruega se asocien a los trabajos de los comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución. Dicho acuerdo se ha contemplado en el Canje de Notas entre la Comunidad e Islandia y Noruega ⁽⁴⁾, adjunto al Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ DO ...

⁽²⁾ Dictamen emitido el ... (no publicado aún en el Diario Oficial).

⁽³⁾ DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

⁽⁴⁾ DO L 176 de 10.7.1999, p. 53.

⁽⁵⁾ DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.

- (9) El presente Reglamento y la participación del Reino Unido y de Irlanda en su adopción y aplicación se entienden sin perjuicio de los acuerdos de participación parcial del Reino Unido e Irlanda en el acervo de Schengen definidos por la Decisión 2000/365/CE⁽¹⁾ y la Decisión 2002/192/CE⁽²⁾ respectivamente.
- (10) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo relativo a la posición de Dinamarca, anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no está vinculada por él ni sujeta a su aplicación. Teniendo en cuenta que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen con arreglo a lo dispuesto en el título IV de la Parte III del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca, de conformidad con el artículo 5 de dicho Protocolo, decidirá en un periodo de 6 meses tras la adopción del presente Reglamento por el Consejo si lo aplica en su Derecho nacional.
- (11) El presente Reglamento constituye un acto basado en el acervo de Schengen o relativo al mismo según la definición del apartado 1 del artículo 3 del Acta de adhesión.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Manual Sirene constituirá un conjunto de instrucciones, destinado a los operadores de las oficinas Sirene de cada Estado miembro, que establece las normas y procedimientos que regulan el intercambio bilateral o multilateral de información adicional necesaria para ejecutar correctamente determinadas disposiciones del Convenio de Schengen, integrado en el marco de la Unión Europea.

Artículo 2

1. La introducción, la parte 1 y la parte 2, la introducción de la parte 3 y los puntos 3.1.3, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.8, 3.1.9 y 3.1.10 de la parte 3, la introducción de la parte 4 y los puntos 4.3, 4.3.1, 4.3.3, 4.5.1, 4.6, 4.8, 4.9 y 4.10 de la parte 4, la introducción de la parte 5 y los puntos 5.1.1, 5.1.2.2, 5.2 y 5.3

de la parte 5, así como los anexos 1, 2 y 3, los cuadros 3 y 4 del anexo 4, la introducción y formularios C, E, G, I, J, K, L, M, N y O del anexo 5 y el anexo 6 del Manual Sirene se modificarán por la Comisión con arreglo al procedimiento de reglamentación mencionado en el artículo 3.

2. Podrán introducirse en el Manual Sirene instrucciones adicionales, incluidos otros Anexos, de conformidad con el procedimiento de reglamentación mencionado en el artículo 3. En el caso del anexo 5, dichas modificaciones podrán incluir, en particular, la creación de otros formularios si fueren necesarios.

Artículo 3

1. La Comisión estará asistida por un Comité de reglamentación, en lo sucesivo denominado Comité.
2. Cuando se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en dos meses.

3. El Comité adoptará su reglamento interno.

Artículo 4

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Hecho en ...

Por el Consejo

El Presidente

...

⁽¹⁾ DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.

⁽²⁾ DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.

Iniciativa del Reino de España con vistas a la adopción de una Directiva del Consejo sobre la obligación de los transportistas de comunicar los datos de las personas transportadas

(2003/C 82/08)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra a) del apartado 2 de su artículo 62 y la letra b) del apartado 3 del artículo 63,

Vista la iniciativa del Reino de España ⁽¹⁾,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo ⁽²⁾,

Considerando lo siguiente:

- (1) Con objeto de luchar eficazmente contra la inmigración ilegal, resulta esencial que todos los Estados miembros cuenten con un sistema para determinar las obligaciones de los transportistas que trasladan a nacionales de terceros países al territorio de los Estados miembros. Para garantizar una mayor eficacia de dicho objetivo, conviene asimismo armonizar, en la medida de lo posible, las sanciones pecuniarias previstas en los Estados miembros para el caso de incumplimiento de las obligaciones que incumben a los transportistas, teniendo en cuenta las diferencias en los ordenamientos y prácticas jurídicas.
- (2) La presente medida se inscribe en un dispositivo global de control de los flujos migratorios y de lucha contra la inmigración ilegal.
- (3) No se debería condicionar la libertad de los Estados miembros para mantener o establecer obligaciones o sanciones adicionales para los transportistas, con independencia de que estén o no sujetos a la presente Directiva.
- (4) Los Estados miembros velarán por que en todo procedimiento incoado contra transportistas que pueda dar lugar a la aplicación de sanciones puedan ejercerse efectivamente los derechos de defensa y de recurso contra tales decisiones.
- (5) Las presentes medidas recogen las posibilidades de control contempladas en la Decisión del Comité Ejecutivo de Schengen [SCH/com-ex (94) 17-4^a rev.], permitiendo aumentar los controles en las fronteras y disponer de tiempo suficiente para realizar un control fronterizo detallado y pormenorizado de cada uno de los pasajeros, al haberse transmitido por vía electrónica, al aeropuerto de llegada, los datos de las personas transportadas.

(6) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva, que por tanto no es vinculante para este país ni aplicable a él. Dado que la presente Directiva tiene por objeto el desarrollo del acervo de Schengen a tenor de las disposiciones del título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca, en virtud del artículo 5 del mencionado Protocolo, decidirá si incorpora la presente Directiva a su legislación nacional, en un plazo de seis meses a partir de su aprobación por el Consejo.

(7) En lo que respecta a la República de Islandia y al Reino de Noruega, la presente Directiva desarrolla el acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado el 18 de mayo de 1999 por el Consejo de la Unión Europea con dichos Estados sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Objeto

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para establecer la obligación para los transportistas de transmitir a las autoridades encargadas de realizar los controles de fronterizos:

- a) en el momento de la realización del embarque, la información relativa a las personas que vayan a ser transportadas;
- b) la información relativa a los extranjeros que hayan trasladado hasta el territorio de los Estados miembros y que, en la fecha prevista en el billete de viaje, no hayan retornado al país de procedencia o no hayan continuado el viaje hacia un tercer país. Dicha información deberá remitirse en el plazo máximo de 48 horas, a contar desde la fecha prevista para realizar el retorno o continuar con el viaje hacia un tercer país.

La información contendrá el número de pasaporte o documento de viaje utilizado, la nacionalidad, el nombre y apellidos y la fecha y lugar de nacimiento.

Artículo 2

Sanciones

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las sanciones aplicables a los transportistas sean disuasorias, efectivas y proporcionales, y que:

⁽¹⁾ DO C ...

⁽²⁾ DO C ...

a) o bien su importe máximo no sea inferior a 5 000 euros,

b) o bien su importe mínimo no sea inferior a 3 000 euros,

o al equivalente en la divisa nacional al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de . . . , por cada viaje realizado sin haber comunicado los datos de las personas transportadas o por haberlos comunicado incorrectamente.

2. Los Estados miembros podrán adoptar o mantener contra los transportistas que incumplan las obligaciones derivadas de la presente Directiva, otras sanciones como la inmovilización, incautación y decomiso del medio de transporte, o la suspensión provisional o retirada de la autorización de explotación.

Artículo 3

Recursos

Los Estados miembros velarán por que sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas prevean derechos de defensa y de recurso efectivos para los transportistas frente a los que se incoen procedimientos encaminados a imponer sanciones.

Artículo 4

Tratamiento de datos

1. Los datos de las personas a que se refiere el artículo 1 se transmitirán a las autoridades encargadas de realizar el control de las personas en el cruce de las fronteras exteriores con el único fin de facilitar la ejecución de dicho control.

2. Una vez que haya concluido la realización del control fronterizo de las personas transportadas, los Estados miembros procederán a borrar los datos transmitidos.

Artículo 5

Transposición

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el . . . Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten tales disposiciones, éstas contendrán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en el momento de su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones fundamentales de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 6

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Artículo 7

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Hecho en . . .

Por el Consejo

El Presidente

. . .

Iniciativa de la República Helénica con vistas a la adopción de una Decisión del Consejo sobre los procedimientos para modificar el Manual Sirene

(2003/C 82/09)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular las letras a) y b) de su artículo 30, las letras a) y b) del artículo 31 y la letra c) del apartado 2 del artículo 34,

Vista la iniciativa de la República Helénica ⁽¹⁾,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo ⁽²⁾,

Considerando lo siguiente:

- (1) El Sistema de Información Schengen, en lo sucesivo denominado el SIS, creado de conformidad con lo dispuesto en el título IV del Convenio de 1990 de Aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, en lo sucesivo denominado el *Convenio de Schengen*, constituye un instrumento fundamental para la aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen tal como ha sido integrado en el marco de la Unión Europea.
- (2) Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 92 del Convenio de Schengen, las partes nacionales de los Estados miembros no pueden intercambiar datos SIS directamente entre ellas; únicamente pueden intercambiar datos a través de la función de apoyo técnico de Estrasburgo. No obstante, resulta adecuado el intercambio bilateral o multilateral de determinada información adicional necesaria para ejecutar correctamente determinadas disposiciones del Convenio de Schengen. Dicha información adicional es precisa, en particular, en relación con la acción necesaria con arreglo a lo dispuesto en los artículos 25, 39, 46, 95 a 100, el apartado 3 del artículo 102, el apartado 3 del artículo 104, y los artículos 106, 107, 109 y 110 del Convenio de Schengen. Las oficinas Sirene de cada Estado miembro llevan a cabo el intercambio de dicha información.
- (3) El Manual Sirene es un conjunto de instrucciones, destinado a los operadores de las oficinas Sirene de cada Estado miembro, que describe en detalle las normas y procedimientos que regulan el intercambio bilateral o multilateral de dicha información adicional.
- (4) Es necesario crear un procedimiento para modificar el Manual Sirene de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Tratados.
- (5) La base jurídica de dichas modificaciones consta de dos partes: la presente Decisión basada en el artículo 66 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y un Reglamento del Consejo basado en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 30, las letras a) y b) del artículo 31 y la letra c) del apartado 2 del artículo 34 del Tratado de la Unión Europea. La razón de todo ello es que, tal como se establece en el artículo 92 del Convenio de Schengen, el SIS permitirá que las autoridades designadas por los Estados miembros, dispongan mediante un procedimiento de consulta automatizado, de descripciones de personas y de objetos para efectuar controles en la frontera y otros controles de policía y de aduanas dentro del país de conformidad con el Derecho nacional, así como a efectos de la expedición de visados y permisos de residencia y de la administración de la legislación de extranjería en el marco de la aplicación de las disposiciones sobre la circulación de personas. El intercambio de información adicional necesario para ejecutar las disposiciones del Convenio de Schengen mencionado en el anterior considerando 2, llevado a cabo por las oficinas Sirene de cada Estado miembro, contribuye asimismo a dichos objetivos, así como al de asistir en la cooperación policial en general.
- (6) El hecho de que la base jurídica necesaria para hacer posibles futuras modificaciones del Manual Sirene conste de dos instrumentos distintos no afecta al principio de que el SIS constituye, y debe seguir constituyendo, un solo sistema integrado de información ni de que las oficinas Sirene deben seguir desempeñando sus cometidos de forma integrada.
- (7) La presente Decisión establece procedimientos para adoptar las medidas necesarias para su ejecución, que corresponden a los del Reglamento (CE) n.º .../2003, a fin de garantizar que sólo exista un procedimiento de ejecución para la modificación del Manual Sirene en su conjunto.
- (8) Debe celebrarse un acuerdo para permitir que los representantes de Islandia y Noruega se asocien a los trabajos de los comités que asisten a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución. Dicho acuerdo se ha contemplado en el Canje de Notas entre la Comunidad e Islandia y Noruega, adjunto al Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen ⁽³⁾.
- (9) La presente Decisión y la participación del Reino Unido y de Irlanda en su adopción y aplicación se entienden sin perjuicio de los acuerdos de participación parcial del Reino Unido e Irlanda en el acervo de Schengen definidos por la Decisión 2000/365/CE ⁽⁴⁾ y la Decisión 2002/192/CE ⁽⁵⁾ respectivamente.

⁽¹⁾ DO C ...

⁽²⁾ Dictamen emitido el ... (aún no publicado en el Diario Oficial).

⁽³⁾ DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.

⁽⁴⁾ DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.

⁽⁵⁾ DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.

(10) La presente Decisión constituye un acto basado en el acervo de Schengen o relativo al mismo según la definición del apartado 1 del artículo 3 del Acta de adhesión.

DECIDE:

Artículo 1

El Manual Sirene constituirá un conjunto de instrucciones, destinado a los operadores de las oficinas Sirene de cada Estado miembro, que establece las normas y procedimientos que regulan el intercambio bilateral o multilateral de información adicional necesaria para ejecutar correctamente determinadas disposiciones del Convenio de Schengen, integrado en el marco de la Unión Europea.

Artículo 2

1. La Introducción, la parte 1 y la parte 2, la introducción de la parte 3 y los puntos 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10 y 3.2 de la parte 3, la introducción de la parte 4 y los puntos 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 de la parte 4, la introducción de la parte 5 y los puntos 5.1.1, 5.1.2.1, 5.1.2.3, 5.1.2.4, 5.1.2.5, 5.1.2.6, 5.1.2.7, 5.2 y 5.3 de la parte 5, así como los anexos 1, 2, 3 y 4, la introducción y formularios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, y P del anexo 5 y el anexo 6 del Manual Sirene se modificarán con arreglo al procedimiento de reglamentación mencionado en el artículo 3.

2. Podrán introducirse en el Manual Sirene instrucciones adicionales, incluidos otros anexos, de conformidad con el procedimiento de reglamentación mencionado en el artículo 3. En el caso del anexo 5, dichas modificaciones podrán incluir, en particular, la creación de otros formularios si fueren necesarios.

Artículo 3

1. Cuando se haga referencia al presente artículo, la Comisión estará asistida por un Comité de reglamentación integrado por los Representantes de los Estados miembros y presidido por el Representante de la Comisión.

2. El Comité adoptará su reglamento interno a propuesta de la presidencia, basándose en normas tipo de procedimiento que se hayan publicado en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

3. El Representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas que deban tomarse. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 205 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en el caso de decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. Con motivo de la votación en el Comité, los votos de los Representantes de los Estados miembros se ponderarán de la manera definida en el artículo anteriormente citado. El presidente no tomará parte en la votación.

4. La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean conformes al dictamen del Comité.

5. Cuando las medidas previstas no sean conformes al dictamen del Comité o en ausencia de dictamen, la Comisión someterá sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que deban tomarse e informará al Parlamento Europeo.

6. El Consejo, por mayoría cualificada, podrá tomar una decisión sobre la propuesta dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la misma.

Si dentro de ese plazo el Consejo, por mayoría cualificada, manifiesta que se opone a la propuesta, la Comisión volverá a examinarla. La Comisión podrá presentar al Consejo una propuesta modificada, volver a presentar su propuesta o presentar una propuesta legislativa.

Si al término de dicho plazo el Consejo no hubiera adoptado la propuesta de un acto de aplicación ni hubiera señalado su oposición a la propuesta de medidas de aplicación, la Comisión adoptará el acto de aplicación propuesto.

Artículo 4

La presente Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Hecho en ...

Por el Consejo

El Presidente

...

III

(Informaciones)

COMISIÓN

Convocatoria de propuestas restringida en el ámbito de la inspección de la salud y la seguridad en el trabajo

VP/2003/19

(2003/C 82/10)

Contexto y objetivos

La línea presupuestaria B3-4310 permite a la Comisión de las Comunidades Europeas apoyar proyectos en el ámbito de la salud y la seguridad cuyos objetivos puedan contribuir significativamente a las prioridades que se ha fijado. La Comisión ha considerado especialmente importante facilitar las actividades de los inspectores de trabajo destinadas a fomentar la aplicación efectiva del Derecho comunitario.

Por lo que respecta a las orientaciones generales en materia de inspección de la seguridad y la salud en el trabajo, la Comisión se basa en el informe de los expertos del Comité de Altos Representantes de la Inspección de Trabajo, al que también se mantiene informado de las propuestas seleccionadas.

Con el fin de lograr el objetivo enunciado anteriormente, la Comisión prevé cofinanciar, en beneficio exclusivo de las autoridades nacionales de los Estados miembros responsables de la inspección de trabajo, proyectos en los siguientes ámbitos:

1. Intercambio de inspectores entre las administraciones de los Estados miembros**2. Evaluación de los sistemas nacionales de inspección****Aviso importante: únicamente podrán presentar proyectos las autoridades competentes en materia de inspección de los Estados miembros.**

El presupuesto total disponible en el marco de la presente convocatoria de propuestas será de aproximadamente 30 000 euros (10 000 para el proyecto 1 y 20 000 para el proyecto 2).

Se seleccionará a los beneficiarios con arreglo a los criterios indicados en la presente convocatoria de propuestas y en función del presupuesto disponible. Las decisiones se referirán al ejercicio presupuestario de 2003 y los proyectos deberán realizarse en el transcurso de 2003 y 2004.

No es necesario que los candidatos rellenen el formulario de candidatura, sino que deben atenerse al procedimiento previsto para el intercambio de inspectores de trabajo que se indica en el anexo I.

La contribución financiera de la Comisión se limitará al reembolso de los gastos de viaje y de estancia conforme a la normativa en vigor. La tasa aplicada es del 100 %.

La fecha límite para la recepción de estas solicitudes será el 30 de septiembre de 2003.

Criterios de selección

Sólo se tendrán en cuenta las propuestas de los candidatos que actúen en calidad de autoridades competentes de inspección en materia de salud y seguridad en el trabajo en un Estado miembro y:

- que tengan forma jurídica propia,
- que dispongan de una estructura de gestión administrativa y financiera propia,
- cuyos recursos financieros no estén constituidos exclusivamente por subvenciones y ayudas de instituciones europeas,
- que puedan financiar sus actividades durante el período de realización de la acción propuesta,
- que tengan capacidad técnica para llevar a cabo la acción propuesta.

Quedarán excluidas las ofertas:

- presentadas por candidatos que no representen a la autoridad competente para la inspección de la salud y la seguridad en el trabajo en su país,
- enviadas fuera del plazo indicado más adelante,
- cuyas actividades dependan de otras iniciativas comunitarias,
- cuyas actividades sean simples repeticiones de iniciativas nacionales.

Criterios de concesión de las subvenciones

Cuando se examinen las propuestas, se seleccionará a los beneficiarios con arreglo a los siguientes criterios:

- conformidad con los objetivos definidos anteriormente,
- visibilidad de la dimensión comunitaria,
- efectos de estímulo y visibilidad de la subvención comunitaria,
- experiencia práctica confirmada en el ámbito elegido,
- capacidad para garantizar el intercambio de información y la transferencia de experiencias entre los Estados miembros,
- relación coste-eficacia de la acción.

Procedimiento para la presentación de las propuestas

Las propuestas, junto con todos los documentos requeridos, deberán enviarse con arreglo al procedimiento descrito en el anexo I a la dirección postal que se indica a continuación, antes del 30 de septiembre de 2003, de lo cual dará fe el matasellos de correos. Se rechazarán las propuestas enviadas por fax o por correo electrónico así como los expedientes incompletos.

Comisión Europea
Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales
EMPL/D/5 — Salud, seguridad e higiene en el trabajo
Edificio Jean Monnet C3/066A
L-2920 Luxemburgo
Fax (352) 4301 34259
Correo electrónico: jocelyne.husson@cec.eu.int

ANEXO I**Anexo de la convocatoria de propuestas — Línea presupuestaria B3-4310****PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA EL INTERCAMBIO DE INSPECTORES DE TRABAJO****INFORMACIÓN QUE DEBE PROPORCIONARSE A LA COMISIÓN**

1. Carta de la autoridad nacional del país solicitante dirigida a la Comisión, en la que se deberá indicar:
 - el objetivo exacto del intercambio,
 - la duración del intercambio y las fechas fijadas de acuerdo con el país de acogida.
2. Copia de la carta enviada por el país de acogida al país solicitante para confirmar el acuerdo.
3. Nombre, dirección y datos de contacto del inspector.
4. Coste del viaje desde el lugar de origen del inspector hasta el país de acogida, más los gastos de desplazamiento en el interior de este país, preferentemente indicados en euros (**la Comisión calculará las dietas que deban concederse mientras dure la misión, en función del número de días naturales**).
5. Número de cuenta (bancaria o postal) y certificado de identificación bancaria del inspector (**adjúntese un original del certificado**).

Toda la documentación deberá presentarse a la Comisión (a la atención de la DG EMPL/D/5), Bâtiment Jean Monnet L-2920 Luxemburgo, **al menos dos meses antes de la fecha de comienzo prevista**.

ANEXO II**Anexo de la convocatoria de propuestas – Línea presupuestaria B3-4310**

El calendario previsto es el siguiente:

- Publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*: abril de 2003.
 - Fecha límite para la presentación de propuestas: 30 de septiembre de 2003.
-